

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

25ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA – 16 DE JUNIO DE 1999

Presidencia del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, don MARIO A. LOSADA  
y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, don ROBERTO A. ULLOA

Secretarios: señor JUAN C. OYARZUN, doctor VICTOR EDUARDO PEREYRA  
y señor PEDRO C. MARANGUELLO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, señor ALEJANDRO L. COLOMBO,  
señor RICARDO BALESTRA y señor TAHA AHMAD

### PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge Alfredo  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
ALTUNA, Juan Carlos  
ARNOLD, Eduardo Ariel  
AVELÍN, Alfredo  
BAUM, Daniel  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CANTARERO, Emilio Marcelo  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DEL PIERO, Pedro  
GAGLIARDI, Edgardo  
GALVÁN, Raúl A.  
GARCÍA ARECHA, José M.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LOSADA, Mario A.  
MAGLIETTI, Alberto  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan Ignacio  
MIKKELSEN LOTH, Jorge Federico  
MIRANDA, Julio  
MOLINARI ROMERO, Luis Arturo R.  
ORTEGA, Ramón Bautista  
OUDIN, Ernesto René  
PARDO, Angel Francisco  
PRETO, Ruggero  
ROMERO, Marcelo Juan

ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José María  
SAGER, Hugo Abel  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio Argentino  
SAPAG, Silvia Estela  
SERGNESE, Carlos José Antonio  
TELL, Alberto Máximo  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio Daniel  
VAQUIR, Omar M.  
VARIZAT, Daniel A.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLAYERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge Raúl  
ZALAZAR, Horacio Aníbal

### AUSENTES CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo César  
CABANA, Fernando F.  
CAFIERO, Antonio F.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA SOTA, José Manuel  
MANFREDOTTI, Carlos  
MENEHINI, Javier Reynaldo  
MOREAU, Leopoldo R. Guido  
PRUYAS, Tomás Rubén  
REUTEMANN, Carlos A.  
SAPAG, Felipe R.  
VILLARROEL, Pedro G.

### EN COMISION:

LÓPEZ, Alcides H.

### A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

MENEM, Eduardo

- ción por el inicio del ciclo de teatro leído “Teatrísimo” (S.-644/99). Se aprueba. (Pág. 3070.)
161. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor senador De la Rosa por el que se declara de interés cultural la revista “Semanario Parlamentario” (S.-647/99). Se aprueba. (Pág. 3071.)
162. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor senador De la Rosa por el que se felicita al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina por la edición de la colección *Vidas, ideas y obras de los legisladores argentinos* (S.-648/99). Se aprueba. (Pág. 3072.)
163. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución por el que se declara de interés cultural el programa radial “Cuyanos por el mundo” (S.-649/99). Se aprueba. (Pág. 3073.)
164. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de los señores senadores San Millán y Cantarero por el que se manifiesta satisfacción por el hallazgo de momias incaicas en Salta (S.-436/99). Se aprueba. (Pág. 3074.)
165. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de comunicación del señor senador De la Rosa por el que se declara de interés cultural la muestra Creer para Ver que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires (S.-550/99). Se aprueba. (Pág. 3075.)
166. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se declara de interés cultural la investigación “Incidencia de las políticas públicas en la dimensión económica y social de las industrias culturales argentinas” que se desarrolla en la Fundación Ciccus (S.-551/99). Se aprueba. (Pág. 3076.)
167. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se declaran de interés cultural eventos sobre danzas folklóricas que se desarrollarán en Mendoza (S.552/99). Se aprueba. (Pág. 3078.)
168. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor senador Ortega por el que se declaran de interés cultural los Premios Argentina 2020 correspondiente a la rama creativa literatura (S.-591/99). Se aprueba. (Pág. 3079.)
169. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes acerca de la suspensión del régimen de presentación espontánea para morosos ante la AFIP en la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.-688/99). Se aprueba. (Pág. 3080.)
170. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicita el cumplimiento de las medidas de control establecidas para que las empresas de servicios realicen las reparaciones de los trabajos en la vía pública (S.-2.231/98). Se aprueba. (Pág. 3081.)
171. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión y de ley del señor senador Gioja por los que se derogan artículos del decreto 455/99 respecto a la afectación de la recaudación producida de gravámenes creados por leyes especiales y lo atinente al FONAVI (C.D.-34/99 y S.-741/99). Se aprueba. (Pág. 3081.)
172. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se garantiza la continuidad de los programas médico-asistenciales del PAMI para veteranos de Malvinas (C.D.-103/98). Se aprueba. (Pág. 3105.)
173. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador Branda por el que se establece una excepción al decreto 5.158/55 a los efectos de erigir un monumento al Sumo Pontífice (S.-27/99). Se aprueba. (Pág. 3106.)
174. Consideración sobre tablas de los proyectos de declaración de los señores senadores Gioja y Sager, y del señor senador Romero Feris por los que se manifiesta beneplácito por la obtención por parte del seleccionado argentino del título mundial de hockey sobre patines (S.-942 y 923/99). Se aprueba. (Pág. 3107.)
175. Apéndice:
- I. Sanciones del Honorable Senado.  
(Pág. 3110.)
- 
- En Buenos Aires, a las 18 y 8 del miércoles 16 de junio de 1999:
- Sr. Presidente** (Losada). — Queda abierta la sesión.
- 1**
- Asuntos Entrados**
- Sr. Presidente** (Losada). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados desde la última sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunamente a los señores senadores. Este es el momento en que los señores senadores pueden hacer las observaciones que estimen pertinentes.
- La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formulada es la siguiente:
- Sr. Secretario** (Oyarzún). — (Lee)

**Sr. Presidente** (Ulloa). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

### 170

#### CONTROL DE LOS TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicita el cumplimiento de las medidas de control establecidas para que las empresas de servicios realicen las reparaciones de los trabajos en la vía pública. (Orden del Día N° 369.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Oyarzún). – (*Lee*)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Obras Públicas, ha considerado el expediente S.-2.231/98, proyecto de comunicación del senador Leopoldo Bravo, solicitando se de cumplimiento a las medidas de control establecidas para que las empresas de servicios realicen las reparaciones de los trabajos en la vía pública; y os aconsejan su aprobación.

De conformidad con el artículo 125 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de abril de 1999.

*Carlos A. Reutemann. – Alberto R. Maglietti.  
– Ernesto R. Oudin. – Emilio M. Cantarero.  
– Humberto E. Salum. – José A. Romero  
Feris.*

#### Proyecto de comunicación

*El Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga las medidas de control necesarias para que las empresas concesionadas prestatarias de servicios públicos a los usuarios, tales como Metrogas, Aguas Argentinas y otras, que realizan obras en la vía pública y veredas, hagan las reparaciones de los trabajos realizados en dichos lugares.

*Leopoldo Bravo.*

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ciudad está llena de parches y baches a causa de las deficientes reparaciones de las excavaciones rea-

lizadas por las empresas concesionarias de los servicios públicos quienes no cumplen con las reglas del buen arte, en unos casos, y en otros directamente no realizan las reparaciones que deben hacer como consecuencia de trabajos realizados en veredas y vías públicas.

El Poder Ejecutivo nacional cuenta con los organismos de control, o entes controladores, que tienen el deber de activar directamente o de ejercer su autoridad para que las empresas prestatarias, de los servicios públicos adopten las medidas apropiadas sobre el particular.

Son varias las empresas concesionarias de servicios públicos que realizan trabajos en la ciudad por ejemplo, Metrogas, Aguas Argentinas, y otras, dejando las reparaciones que deben efectuar indefinidamente en el tiempo y sin concreción futura. En estos casos los entes de control deben ejercer su autoridad para que los prestatarios de estos servicios públicos adopten las medidas apropiadas.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

*Leopoldo Bravo.*

**Sr. Presidente** (Ulloa). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

### 171

#### AJUSTE DEL GASTO PUBLICO

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Pasamos a los órdenes del día con proyectos de ley. En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión y en el del señor senador Gioja por los que se deja sin efecto los artículos 8° y 9° del decreto 455/99 respecto a la afectación de la recaudación producida de gravámenes creados por leyes especiales y lo atinente al FONAVI. (Orden del Día N° 332.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Oyarzún). – (*Lee*)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado*

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-34/99) dejando sin efecto lo dispuesto por los artículos 8° y 9° del decreto 455/99 (ajuste a créditos presupuestarios), y el proyecto de ley del senador nacional José

Luis Gioja registrado con el número S.-741/99, sustituyendo los artículos 8° y 9° del decreto 455/99 respecto a la afectación de la recaudación producida de gravámenes creados por leyes especiales y lo atinente al FONAVI; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Dispónese una afectación del doce por ciento (12 %) sobre la recaudación que se produzca hasta el 30 de septiembre de 1999, de los gravámenes creados por leyes especiales que se detallan en la planilla anexa al presente artículo. En los casos en que su distribución a provincias se efectúe automáticamente por el Banco de la Nación Argentina, el importe resultante deberá ser acreditado en una cuenta remunerada indisponible abierta a tal efecto en el citado banco, a nombre de cada una de las provincias beneficiarias.

Asimismo las jurisdicciones y entidades responsables de la recaudación de los gravámenes a que alude la citada planilla anexa y cuya distribución no se realiza en forma automática, deberán ingresar el producido de la afectación dispuesta a una cuenta bancaria remunerada indisponible abierta a nombre de cada uno de los organismos responsables de la administración de estos fondos. El Tesoro nacional, sufragará la remuneración de las mencionadas cuentas indisponibles.

Dentro de los treinta (30) días de finalizado el tercer trimestre, las dependencias que figuran en la planilla anexa deberán informar a cada uno de los gobiernos provinciales los saldos de las respectivas cuentas bancarias.

Los mencionados saldos quedarán a disposición de los respectivos gobiernos provinciales y de los organismos receptores de las leyes 23.351 y 24.625, a partir del día 1° de febrero del año 2000.

Art. 2° – Con el objeto de no alterar el resultado financiero negativo previsto, dispónese una disminución de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000) de acuerdo con el siguiente detalle:

En pesos

Ministerio del Interior, partida 392 ...	6.000.000
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, partida 392 ...	5.000.000
Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación, Secretaría de Inteligencia del Estado ...	9.000.000

Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional no podrá incrementar hasta la finalización del presente ejercicio financiero, los créditos presupuestarios previstos en el presupuesto de la administración nacional para la atención del régimen de la ley 18.302 “S”.

Art. 4° – Dispónese asimismo y con igual propósito que el artículo anterior, una rebaja de treinta y cinco millones de pesos (\$ 35.000.000) en los créditos vigentes del inciso 5 - Transferencias de la Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior - Código 99 - Transferencias a Provincias y Comisiones Interjurisdiccionales (ATN).

Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional no podrá hasta la finalización del presente ejercicio financiero utilizar el crédito asignado al Código 96 - Transferencias ATN - Partida 641, de la Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior para reforzar créditos para gastos corrientes y de capital del presupuesto de la administración nacional.

Art. 5° – Los haberes previsionales originados en la ley 24.241 y leyes anteriores que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social y cuyo importe mensual bruto exceda la suma de tres mil cien pesos (\$ 3.100), sufrirán una retención hasta el día 31 de diciembre de 1999 por un monto igual al excedente de dicha suma.

Lo establecido precedentemente será también de aplicación a los beneficios previsionales otorgados por las ex cajas provinciales transferidas a la Administración Nacional, de la Seguridad Social.

Los importes retenidos de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo serán reintegrados a los beneficiarios en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de enero del año 2000. A tal efecto el Poder Ejecutivo nacional incluirá en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2000 los créditos necesarios para atender los pagos correspondientes.

Art. 6° – Establécese que la garantía del Fondo Nacional de la Vivienda a cargo del Tesoro nacional a que se refiere el artículo 3° de la ley 24.464, correspondiente al ejercicio fiscal de 1999, se abonará a las provincias de la siguiente manera:

- a) El importe resultante al 31 de mayo de 1999 se cancelará el 31 de enero del año 2000;
- b) El importe resultante entre el 1° de junio y el 30 de septiembre se cancelará el 30 de abril del año 2000;
- c) El importe resultante entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre se cancelará el 31 de julio del año 2000.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido precedentemente, el Poder Ejecutivo nacional incluirá los pertinentes créditos en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2000.

La Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social comunicará a los gobiernos provinciales, dentro de los treinta (30) días posteriores a las fechas de corte citadas anteriormente, los montos resultantes de la garantía a atender por el Tesoro nacional.

Art. 7° – Los importes resultantes de la asistencia mensual correspondientes al presente ejercicio prevista en el artículo 9° del acta-acuerdo celebrada entre la provincia de Santa Cruz y el Estado nacional con fecha 19 de enero de 1994, se pagarán a la mencionada provincia en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del 1° de febrero del año 2000. El Poder Ejecutivo nacional incluirá el monto correspondiente como amortización de deuda, en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2000.

Art. 8° – Déjase sin efecto, desde la fecha de su publicación, el ajuste en los créditos detallados en las planillas anexas al artículo 1° del decreto 455 de fecha 29 de abril de 1999 para la Jurisdicción 20-12-Secretaría de Desarrollo Social, Programa 20, Partida Parcial 514- Ayudas Sociales a Personas y para la Entidad 906 - Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, por los totales correspondientes a los incisos 1-Gastos en Personal, 3-Servicios No Personales y 4-Bienes de Uso.

Art. 9° – Déjanse sin efecto, desde la fecha de su publicación, los artículos 8°, 9° y 10 del decreto 455, de fecha 29 de abril de 1999.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 125 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1° de junio de 1999.

*Carlos A. Verna. – Ricardo A. Branda. – Antonio F. Cafiero. – Augusto J. M. Alasino. – Emilio M. Cantarero. – José L. Gioja. – Héctor M. Maya. – Jorge A. Villaverde. – Osvaldo R. Sala. – Alberto M. Tell. – Omar M. Vaquir.*

Planilla anexa al artículo 1°

#### FONDOS AFECTADOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Ley 20.628, artículo 104 incisos *b)* y *d)* - 14 %. Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones - Secretaría de Hacienda.

Ley 23.906, artículo 4° - 65 % del impuesto a los activos - Secretaría de Hacienda.

Ley 24.699, artículo 2° y ley 23.966, artículo 18 y artículo 19 incisos *a)* y *b)* - 20.619 % del impuesto a los combustibles - Secretaría de Hacienda.

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior - Combustibles líquidos - Secretaría de Energía.

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior - Energía eléctrica - Secretaría de Energía.

Fondo Nacional de Energía Eléctrica - 60 %. Consumo de energía eléctrica - Secretaría de Energía.

Ley 23.351 - Premios Juegos Azar, ley 20.630 y modificatorias.

Ley 24.625 - Impuesto adicional de emergencia - 7 % sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos.

#### ANTECEDENTES

##### I

#### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(12 de mayo de 1999)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Déjase sin efecto lo dispuesto en los artículos 8° y 9° del decreto 455/99 del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.  
*Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.*

##### II

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 8° del decreto 455/99 por el siguiente:

Artículo 8°: Dispónese una afectación del doce por ciento (12 %) sobre la recaudación que se produzca hasta el 31 de diciembre de 1999, de los gravámenes creados por leyes especiales que se detallan en la planilla anexa al presente artículo. En los casos en que su distribución a provincias se efectúe automáticamente por el Banco de la Nación Argentina, el importe resultante deberá ser acreditado en una cuenta remunerada indisponible abierta a tal efecto en el citado Banco, a nombre de cada una de las provincias beneficiarias.

Asimismo las jurisdicciones y entidades responsables de la recaudación de los gravámenes a que alude la citada planilla anexa, y cuya distribución no se realiza en forma automática, deberán ingresar el producido de la afectación dispuesta en las cuentas de cada provincia mencionadas en el párrafo anterior y en la proporción correspondiente a cada uno de las mencionadas provincias beneficiarias.

El Banco de la Nación Argentina emitirá, a la orden de cada una de las provincias y entregará a cada una de ellas, certificados de depósito transferibles dentro de los cinco días corridos posteriores a la finalización de cada mes calendario. El importe de cada uno de los certificados de depósito transferible será equivalente al monto resultante de la afectación mensual acumulada a la finalización de cada mes calendario.

Los certificados de depósito emitidos por el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de lo prescrito en el presente artículo tendrán un vencimiento único del 30 de noviembre de 2000. Devengarán una tasa de interés nominal anual igual al promedio de tasas pasivas del sistema financiero para plazos equivalentes publicada por el Banco Central de la República Argentina.

El Tesoro nacional sufragará los intereses de los mencionados certificados de depósito.

Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 9° del decreto 455/99 por el siguiente:

Artículo 9°: Para el ejercicio de 1999 la obligación del Tesoro nacional de atender la garantía del Fondo Nacional de la Vivienda a que se refiere el artículo 3° de la ley 24.464, será emitir un bono público nacional por un monto equivalente a la diferencia entre doscientos veinticinco millones de pesos (\$ 225.000.000) y los montos trimestrales efectivamente percibidos por las provincias.

Dicho bono será emitido y entregado a cada una de las provincias beneficiarias dentro de los 10 días corridos de vencido cada trimestre devengando un interés del 6 % anual y amortizables en doce cuotas mensuales durante el ejercicio fiscal 2000.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*José L. Gioja.*

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El decreto 455/99, publicado en el Boletín Oficial con fecha 29 de abril próximo pasado, dispone un ajuste en el gasto público. El Senado ha modificado parcialmente dicho decreto, al excluir de la reducción dispuesta al Ministerio de Educación y al Conicet; criterio convalidado por la Cámara de Diputados, que dio también media sanción a otro proyecto de ley derogando los artículos 8º y 9º del decreto aludido.

El artículo 8º dispone que el 12 % de los recursos originados en leyes especiales o afectaciones de impuestos nacionales que se destinan a provincias, se depositen en una cuenta indisponible remunerada en el Banco de la Nación. El 30 de octubre de este año, la Secretaría de Hacienda podrá optar por emitir un bono intransferible, cuyo vencimiento sería el 30 de noviembre de 2000 o por mantener el depósito indisponible directamente hasta esa misma fecha. En cualquiera de los dos casos por los que optara, desde hoy y hasta fin de año, el 12 % es indisponible, aun cuando los fondos estén depositados a nombre de las provincias, éstas no pueden retirarlo.

La opción por un depósito indisponible o un bono intransferible congela toda posibilidad de que las jurisdicciones provinciales puedan utilizar dicho instrumento para recuperar sus recursos mediante mecanismos del mercado de capitales o del sistema financiero, sin perjuicio de que esos recursos puedan ser utilizados por el Estado nacional.

En tal sentido el decreto vigente no sólo le permite al Estado nacional utilizar dichos recursos para su financiamiento sino que, de la manera que está redactado introduce una innecesaria presión sobre las provincias al limitar a éstas a utilizar los recursos que les son propios para financiar su gasto corriente. Cabe recordar que, en este sentido, las provincias también deben soportar del mismo modo que el Estado nacional la caída en la recaudación tanto de impuestos nacionales como de gravámenes provinciales.

Este proyecto de ley tiene por objeto flexibilizar el impacto de la afectación sobre las provincias sin quitarle al Estado nacional dicha fuente de financiamiento. En efecto se propone que, en lugar de un bono intransferible emitido por el Estado nacional, el Banco de la Nación emita certificados de depósito transferibles de modo tal, de dejar en libertad de acción a las provincias, para colocarlos en el mercado financiero y recuperar la liquidez o mantenerlos hasta su vencimiento. Del mismo modo se especifica la remuneración que deberá pagar la Tesorería de la Nación por el uso de los

fondos equiparándola al interés normal de un plazo fijo. Por último cabe señalar que si el Estado nacional optara por la emisión de un bono ello implicaría aumentar la deuda pública nacional. En cambio esta propuesta reemplaza la deuda pública por deuda normal de un banco con sus depositantes.

Paralelamente se propone el mismo criterio en cuanto a la garantía vigente sobre los recursos del FONAVI. En tal sentido las diferencias trimestrales se abonarán con la misma metodología que la afectación mencionada precedentemente.

Señor presidente, esta propuesta cumple con el objetivo de mantener la posibilidad del Estado nacional de utilizar recursos provinciales para financiar su gasto como lo dispone el decreto 455/99, pero incorpora la posibilidad de que las provincias puedan recuperar, a través del mercado financiero o de capitales, los recursos que les son propios.

Por lo expuesto en estos fundamentos, solicito a los señores senadores, acompañen con su voto favorable el proyecto de ley que someto a consideración de esta Honorable Cámara.

*José L. Gioja.*

**Sr. Presidente (Ulloa).** – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Verna.** – Señor presidente: ha venido a consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados el 12 de mayo último, cuya parte dispositiva, que consta de un solo artículo, determina dejar sin efecto las disposiciones de los artículos 8º y 9º del decreto 455/99. Estas últimas disposiciones están referidas a la apropiación por parte del Tesoro nacional, de recursos con destino específico que, en gran medida, estaba previsto que fueran girados a las provincias en el curso del presente ejercicio financiero, estableciendo un proceso de reintegro posterior.

En el caso del artículo 8º esta afectación alcanza el 12 por ciento del producido de fondos creados por leyes especiales y, en el artículo 9º, a la garantía de la Nación para asegurar un mínimo de 75 millones de pesos mensuales en el monto a distribuir entre las provincias por el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda. A todo este respecto, desde la fecha antes mencionada de la sanción del proyecto por parte de la Honorable Cámara de Diputados se ha producido un acuerdo entre la Nación y los gobiernos provinciales que deriva en un replanteo del manejo presupuestario, cuyo contenido está reflejado en el texto del dictamen que la comisión que presido somete a consideración de esta Honorable Cámara.

A través del artículo 1° se mantiene la afectación establecida por el artículo 8° del decreto 455, modificando dos aspectos. Primero, se anticipa la fecha límite para la retención de los recursos al 30 de septiembre del corriente año, en lugar del 31 de diciembre de 1999. En segundo lugar, se determina que los saldos retenidos quedarán a disposición de los respectivos gobiernos provinciales y de los organismos receptores de la ley 23.351, es decir, la de bibliotecas populares, y la 24.625, que impone un gravamen a los cigarrillos, a partir del 1° de febrero del año 2000.

La modificación también comprende a la planilla anexa, en la que se detallan los fondos sujetos a la afectación, en la cual se excluye expresamente al Fondo Especial del Tabaco. Estas disposiciones requieren un replanteo del financiamiento del presupuesto en curso de ejecución, y se instrumentan en los artículos que van del 2° al 5°. El artículo 2° dispone una rebaja de los créditos asignados para “gastos reservados” en las jurisdicciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en la Secretaría de Inteligencia del Estado de la Presidencia de la Nación, por un total de 20 millones de pesos.

El artículo 3° limita las facultades que las leyes de administración financiera y de presupuesto otorgan al Poder Ejecutivo para transferir créditos entre partidas diferentes, inhabilitándolo en el presente ejercicio para reforzar los créditos autorizados dentro del régimen de gastos reservados.

En un sentido análogo, el artículo 4° del dictamen de comisión dispone una rebaja de 35 millones de pesos en los créditos autorizados para los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, inhibiendo al Poder Ejecutivo para utilizar los fondos liberados para reforzar cualquier otra partida del presupuesto en este ejercicio. A este respecto, queremos anticipar que obra en Secretaría una modificación del dictamen que vamos a sostener, por la cual la rebaja de los fondos de ATN se toma de 35 a 20 millones y se propone, en cambio, una disminución de la partida de viáticos de diversas jurisdicciones por 15 millones de pesos.

El artículo 5° del dictamen establece una retención sobre los haberes previsionales originados en la ley 24.241 y en regímenes anteriores, en todo lo que exceda los 3.100 pesos mensuales, hasta el 31 de diciembre de 1999, extendiéndose a los beneficios otorgados por las ex cajas provinciales transferidas a la Nación.

En su segundo párrafo, se dispone el reintegro de tales retenciones en doce cuotas mensuales iguales y consecutivas en el transcurso del próximo año, debiendo el Poder Ejecutivo incluir las previ-

siones correspondientes en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2000.

El artículo 6° del dictamen, en relación con la garantía de la Nación relativa a los montos correspondientes al FONAVI que se transfieren a las provincias, determina en forma precisa la cancelación de la deuda que la Nación acumula en el presente ejercicio por el hecho de no cumplir con la cobertura a que la obliga dicha garantía, instruyendo al Poder Ejecutivo para que incluya los créditos necesarios en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2000.

El artículo 7° del dictamen, unido a lo que se dispone en el artículo 9° al dejar sin efecto el artículo 10 del decreto 455/99, implica la continuidad de la asistencia mensual a la provincia de Santa Cruz, contemplada en el artículo 9° del acta acuerdo celebrada entre el Estado nacional y esta provincia, aunque acepta la suspensión por el corriente ejercicio y su reintegro en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del 1° de febrero del año 2000.

Seguidamente, en el artículo 8° el dictamen dispone dejar sin efecto la rebaja dispuesta en el artículo 1° del decreto 455 en los créditos destinados a la partida de Ayuda Social a Personas, dentro de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Social —que, en la planilla anexa a dicho artículo del decreto totaliza 2.500.000 pesos—, y en los créditos asignados al Instituto Malbrán para gastos en personal, servicios no personales y bienes de uso, que en conjunto suman 1.243.146 pesos.

Finalmente, a través del artículo 9° del dictamen y, como corresponde, siguiendo la correcta técnica legislativa, se dejan sin efecto desde la fecha de su publicación los artículos 8°, 9° y 10 del decreto 455/99, que quedan reemplazados así por las disposiciones del presente proyecto de ley.

Señor presidente: como manifestara al comienzo de mi exposición, en lo esencial el proyecto de ley que tenemos en consideración responde a un acuerdo entre los máximos niveles de la conducción política de la Nación y de las provincias, en procura de preservar los intereses de estas últimas, sin dejar de contemplar —al mismo tiempo— la crítica situación por la que atraviesan las finanzas públicas del Estado nacional.

Por lo expuesto, señor presidente, en nombre de la bancada justicialista adelanto nuestro voto afirmativo.

**Sr. Presidente** (Ulloa). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Altuna.** — Señor presidente: también vamos a adelantar nuestro voto sobre el tema que nos ocupa, pero en sentido negativo. Ya es sabido que

el decreto 455 tanto en Diputados como aquí mereció el rechazo de nuestro bloque por considerar que se trata de una pequeñísima reforma a la ley de presupuesto vigente –25.064–. Tan es así, que este proyecto de ley que estamos considerando ya viene con sus propias modificaciones desde mediados del mes pasado. Hoy encontramos sobre estas bancas una nueva modificación, que –es cierto– viene con dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Consideramos que esta iniciativa en nada va a resolver los problemas financieros que ya se advierten y que afronta un presupuesto que, señores senadores, arroja un déficit de 6.400 millones de pesos. En consecuencia, en muy poco podrá resolver la gravísima situación financiera de la República. Aquí se propone, simplemente, disminuir veinte millones de pesos en gastos reservados. Por cierto, es saludable este reconocimiento del propio Poder Ejecutivo. A través del artículo 4º, también se propone una reducción de veinte millones de pesos en los aportes al Tesoro nacional, lo que también es saludable. Pero, en homenaje a la verdad, debo decir que esta reducción ha prosperado gracias a las gestiones que oportunamente hiciera el señor gobernador de la provincia de La Rioja, al quejarse airadamente por el recorte que se...

**Sr. Cantarero.** – ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Señor senador: el senador por Salta le solicita una interrupción, ¿la concede?

**Sr. Altuna.** – Sí, señor presidente, cómo no.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Cantarero.** – Señor presidente: en materia del déficit presupuestario previsto para el presente ejercicio, nosotros manejamos la cifra de 5.100 millones de pesos. Como el señor senador Altuna mencionó la suma de 6.400 millones de pesos, quisiéramos preguntar de dónde surge esta cifra de 6.400 millones de déficit en el presente año.

**Sr. Altuna.** – Con todo gusto voy a contestar al señor senador. Oportunamente, expuse en este recinto que teníamos un déficit de 5.823 millones de pesos. Las nuevas cifras confirmadas hace muy pocos días por el Ministerio de Economía reflejan que por la aplicación de parámetros distintos el producto bruto interno ha bajado a la cifra de 298.000 millones de pesos. El Congreso de la Nación aprobó en su momento un presupuesto de gastos de 49.300 millones de pesos. La recaudación prevista en dicho presupuesto fue de 45.702 millones de pesos.

El propio ministro de Economía dijo que, lamentablemente y como consecuencia de la situación vivida por la hermana República del Brasil, los recursos van a bajar nada menos que 3.002 millones de pesos. Esto ha sido reconocido por el señor ministro y está corroborado en los hechos. Hay una recesión económica evidente que no podemos ignorar. Si buscamos la relación entre el presupuesto de gastos –49.300 millones– y la recaudación real –42.700 millones–, nos encontramos con que tendremos un déficit del 2,2 por ciento; comparado con el PBI, obtendremos la cifra que acabo de mencionar: 6.400 millones de déficit para este año.

Si bien es cierto que los senadores del oficialismo reconocen un máximo de 5.100 millones, los números que manejo de acuerdo con el detalle que acabo de brindar arrojan la cifra de 6.400 millones de pesos de déficit. Ojalá esté equivocado; el tiempo nos dirá. Estamos ante un déficit tremendo.

Así respondo a la inquietud del señor senador. No sé si ha quedado satisfecho.

**Sr. Cantarero.** – ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Altuna.** – Cómo no.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Cantarero.** – La explicación del senador es muy explícita, pero creo que ha omitido 1.000 millones correspondientes a la reducción de partidas presupuestarias realizada por el Poder Ejecutivo vía decreto. Si a 6.400 millones le restamos 1.000 millones obtenemos 5.400 millones, cifra cercana a los 5.100 millones a los que nosotros aludimos. No quiero hacer una polémica. Que el señor senador siga exponiendo, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Continúa en uso de la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Altuna.** – Repito que estamos aproximados en cuanto a los números. Ojalá tenga usted razón, para la salud financiera de este presupuesto.

Vuelvo al tema que nos ocupa. Se disminuyen en gastos reservados veinte millones de pesos. Se hace un ahorro en los ATN, fundamentalmente, a requerimiento de La Rioja. Aquí quiero decir, con todo el cariño que tenemos por nuestra querida provincia de La Rioja, que es bueno que la República sepa que esta es la provincia privilegiada en el reparto de los ATN. Tengo un informe oficial de 1996, que muestra que ha percibido el 47 por ciento de toda la masa de aportes del Tesoro nacional. Para que tengamos idea de la magnitud de lo que estamos diciendo, sobre 545 millones doscientos mil pesos, La Rioja ha recibido 256 millones de pesos. Y a modo de ejemplo, le puedo citar los

casos de Chubut –mi provincia–, que recibió 4.600.000 de pesos –fíjense cómo cambian los números–; Misiones, a la que le dieron 4.100.000 pesos; Santa Fe, con 3.300.000 pesos; Mendoza, con 2.900.000 pesos; San Luis, con 1.600.000 pesos; Catamarca, con 6.000.000 pesos; etcétera. Entonces, que la República tenga conciencia del monto de nuestro déficit y de cómo se subsidia a La Rioja, lo cual no me parece mal, pero sí injusto e inequitativo con el resto de las provincias que mencioné, a las que podría agregar Río Negro, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, que reciben menos dinero. No obstante ello, este proyecto que teníamos para considerar la semana pasada fue modificado por arte de magia de las buenas gestiones que hizo el propio gobernador de La Rioja. Entonces, si bien aquí se ahorra o se propone una quita de veinte millones de pesos, más otros veinte millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos, por el mismo artículo de la iniciativa se autoriza un gasto de cuarenta millones de pesos más, que estaban en un crédito congelado de 119.700.000 de pesos. Por lo tanto, el ahorro en los gastos reservados y la disminución de ATN quedan totalmente neutralizados con este gasto que se le autoriza a realizar al Poder Ejecutivo.

El artículo 5° es lo único positivo que veo del proyecto, ya que por él se reducirán los pasajes y los viáticos en quince millones de pesos. Reitero que esto es lo único concreto y positivo, puesto que todo lo demás se traslada al nuevo presupuesto. Por lo tanto, hoy no estamos resolviendo nada, sino lanzando un nuevo problema para el próximo ejercicio, y para el nuevo gobierno, no me cabe duda.

En efecto, vamos a transferir la obligación de pagar a las provincias ese 12 por ciento de los recursos afectados a leyes especiales –en donde se encuentran los impuestos a las ganancias, a los activos, a los combustibles, a la energía, a los juegos de azar y el de emergencia a la venta de cigarrillos–, que se les reintegrará a partir del 1° de febrero del año próximo.

En consecuencia, los problemas que nos está trayendo este déficit, al cual hacía referencia, hacen que el Poder Ejecutivo no tenga las disponibilidades para cumplir con los compromisos oportunamente contraídos y les genera a todas las provincias argentinas un nuevo problema de caja, con las pertinentes consecuencias económicas y sociales.

Por otro lado, también con este afán de transferir problemas, decimos que a todos aquellos que tienen jubilaciones superiores a los 3.100 pesos

mensuales se les efectuará un ahorro obligatorio que será cancelado en doce cuotas a partir del año que viene. Entonces, más allá de los problemas impositivos que genera esta situación, como lo serían la retención del pagador y el inconveniente que tendrá el beneficiario, estamos otra vez transfiriendo un problema de manera indefinida, porque no se cuantifica lo que se traslada para el año próximo.

Sin embargo, sí está medianamente cuantificado lo que se trasladará al nuevo presupuesto en concepto de fondos recaudados por el Fondo Nacional de la Vivienda. Situaciones que se tendrían que haber cumplido en mayo, septiembre y diciembre de este año, las estamos pasando para enero, abril y julio de 2000. Y estoy hablando de 360, 480 y 360 millones de pesos; es decir que según mis cálculos estamos trasladando al nuevo presupuesto un arrastre o un pasivo de 1.200 millones de pesos. Por lo tanto, señor presidente, nosotros queremos dar el quórum necesario...

**Sr. Verna.** – ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Altuna.** – ...para que la mayoría decida esta situación. Por nuestra parte, repudiamos el decreto 455 y lamentamos que esta Cámara no acompañe la sanción de la Cámara de Diputados en la derogación de los artículos 8° y 9° del mencionado decreto.

**Sr. Verna.** – ¿Me permite una aclaración?

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Para una aclaración tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Verna.** – Creo que ha habido un error en el monto que el señor senador preopinante dice que se transfiere por vía del FONAVI para el próximo año. El gobierno nacional está cumpliendo con la distribución del dinero que se recauda en función del impuesto a los combustibles; no así con relación a la garantía de 75 millones por mes. El total de los fondos FONAVI garantizados asciende a 900 millones, con lo cual es imposible transferir 1.200 millones de deuda. Es más, el mes pasado el gobierno se puso al día con la garantía del año 98, o sea que va a transferir la diferencia entre lo recaudado y la garantía, cifra que de ninguna manera va a superar los 400 millones de pesos.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Altuna.** – Todo lo que tendría que transferir el Estado durante este año lo traslada directamente para el próximo año.

**Sr. Verna.** – Se refiere a la garantía.

**Sr. Altuna.** – No lo dice claramente.

**Sr. Verna.** – Es la diferencia entre lo recaudado y la garantía; el resto lo está pagando.

**Sr. Presidente** (Ulloa). – Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** – Señor presidente: nuestro bloque va a votar por el proyecto tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados, por el cual se rechaza el veto del Poder Ejecutivo. Es decir que nuestro bloque va a votar en contra del dictamen de mayoría, que no prevé otra cosa que agregados o modificaciones al veto efectuado por el Poder Ejecutivo, que no podemos aceptar.

El artículo 8º es una modificación de la ley 23.548, de coparticipación, es decir, la ley convenio aprobada por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales. En consecuencia, esos ingresos jamás pudieron ser modificados por un decreto del Poder Ejecutivo, como tampoco pueden serlo por el Congreso de la Nación si ello no es ratificado luego por las legislaturas provinciales.

Los senadores debemos defender los intereses de las provincias. En consecuencia, no podemos aceptar este recorte de ingresos que se hace para solucionar problemas presupuestarios cuya responsabilidad recae, fundamentalmente, en la mala administración o en el mal manejo de los fondos públicos que realiza el Poder Ejecutivo. Tampoco vamos a aceptar la propuesta con relación al artículo 9º y a las garantías sobre el FONAVI, porque las garantías de la Nación deben permanecer, dado que la mayor parte se vincula con obras ya realizadas o en vías de realización; en consecuencia, esas garantías no pueden ser eliminadas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Mario A. Losada.

**Sr. Maglietti.** – Volviendo sustancialmente al problema del dictamen de la mayoría, pienso que hay muchas otras soluciones factibles que no impliquen acudir a estos recortes, que constituyen sumas irrisorias si lo comparamos con lo que está sucediendo en materia de evasión y de despilfarro de los fondos públicos.

Aquí en más de una oportunidad se habló de los millones y millones que se gastan en materia de gastos reservados sin rendición de cuentas, cosa que no ocurre en ningún país democrático del mundo, porque no pueden existir gastos reservados sin rendición de cuentas alguna. Estos gastos reservados deben ser definitivamente eliminados, toda vez que casi alcanzan la suma de 400 millones de pesos.

Tampoco deben existir los ATN, señor presidente, porque son utilizados políticamente y en forma

indiscriminada para otorgar favores políticos. Deben ser eliminados porque implican una suma muy importante, que alcanza los trescientos millones de pesos.

Podemos seguir haciendo una larga enumeración de gastos innecesarios y sobre los cuales podrían haberse hecho recortes presupuestarios con mayor responsabilidad. Esos recortes reclamarían austeridad por parte del gobierno, y no despilfarros como los que vemos, comenzando por los malos ejemplos que da el señor presidente de la Nación con las grandes comitivas que gastan millones de pesos en sus viajes al exterior. En lugar de permanecer en el país ocupado en la solución de los grandes problemas, el señor presidente se dedica a viajar al exterior con grandes comitivas que le cuestan al país enormes sumas de dinero.

No está en mi intención criticar al señor presidente, pero debo decir que los ejemplos de austeridad deben provenir de la autoridad máxima del país. Si se quiere que exista austeridad en los gastos de la administración pública, el ejemplo debe darlo, en principio, el señor presidente de la Nación. Es él quien debe marcar las pautas a cumplirse en las demás reparticiones nacionales.

Dado que estamos en un año electoral y que, evidentemente, no se avizora la intención, por parte del oficialismo, de adoptar conductas más austeras, pensamos que existen otras soluciones importantes y en las cuales se encuentra el quid de la cuestión. Me refiero al problema de la evasión, a la falta de pago de los impuestos por parte de los grandes contribuyentes del país. Esto se logra mediante sistemas contables que les permiten evadir, mediante manejos con sus sucursales del exterior para evitar reflejar sus ganancias en el país, o a través de diversas maniobras que la Dirección General Impositiva debería poder controlar y no lo hace.

Hemos pedido informes que, desgraciadamente, nos han demostrado que la Dirección General Impositiva, por sus propias manifestaciones, no cuenta con personal especializado para inspeccionar a las grandes empresas, como las petroleras.

Por otra parte, el Banco Central no ejerce ningún control sobre los grandes bancos extranjeros, que, como el Amro, el New York Bank, el Banco de San Pablo o el Banco de Tokio, obtienen enormes ganancias en nuestro país y no obstante presentan balances con pérdidas pese a que cobran entre tres y cuatro veces la tasa de interés que perciben en sus países de origen.

En consecuencia, la gravedad del problema estriba en la evasión organizada por parte de las grandes empresas, que es consentida por la propia Di-

rección General Impositiva y por el Banco Central de la República Argentina.

Estamos discutiendo por unos pocos millones de pesos mientras que en el país se evaden miles de millones. Según informes que obran en nuestro poder, la evasión alcanzaría a 24 mil millones de pesos; ocho mil en concepto de impuesto a las ganancias y 16 mil de impuesto al valor agregado.

Sin embargo, nada se hace para recuperar, por lo menos, una parte de esos importantes recursos que tanto necesita nuestro país.

A continuación, voy a darles un ejemplo para demostrar la poca responsabilidad que pone de manifiesto el gobierno nacional. Como consecuencia de un proyecto aprobado por este Senado, se le envió una nota al señor jefe de Gabinete a fin de pedirle un informe sobre dos puntos sustanciales. En el primero de ellos se le preguntó si existían estimaciones oficiales sobre evasión de los impuestos a las ganancias y al valor agregado por parte de las empresas clasificadas como grandes contribuyentes nacionales. ¿Qué contestó la Dirección General Impositiva? Tengo en mi poder la nota número 32, de fecha 22 de enero de 1999, en la que contestó lo siguiente: “Con respecto a lo solicitado en el punto 1 de la comunicación, se informa que esta dirección no cuenta con estimaciones sobre evasión en los impuestos al valor agregado y a las ganancias de empresas categorizadas como grandes contribuyentes nacionales”.

Es decir que la Dirección General Impositiva, según lo que ellos mismos sostienen, ignora absolutamente lo que está pasando con los grandes contribuyentes.

¿Cómo la Dirección General Impositiva, que tiene que ser el ente de control y de recaudación, va a controlar y recaudar si no controla a los grandes contribuyentes, ni siquiera sabe lo que tienen que pagar e informa que no tiene ningún dato al respecto?.

Esto demuestra una tremenda incapacidad y una tremenda irresponsabilidad de parte de la Dirección General Impositiva porque estamos hablando de recursos cuantiosos que se desvían y no se pagan.

La segunda pregunta que se le formuló al señor jefe de Gabinete, para que lo resuelva a través de la DG, fue ¿cuáles son las acciones en curso para evitar las maniobras de evasión y de elusión tributaria y en qué medida los sistemas de promoción y de diferimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuyen a la configuración

de tales maniobras? Adviertan, señores senadores, la respuesta que da el gobierno. Con fecha 4 de febrero, la Dirección General Impositiva responde: “De acuerdo a lo solicitado por esa dirección general en el punto 2 de la nota mencionada en el asunto, se eleva el diskette en programa Word y salida impresa del mismo (siete fojas), conteniendo la nómina de entidades financieras bajo control del sistema Dosmil. Dicha información fue aportada por las agencias dependientes, listándose aquellos casos cuyas liquidaciones del impuesto a las ganancias no arrojan impuesto determinado en alguno de los tres últimos ejercicios”.

Es decir que aquí tenemos una lista impresionante de grandes contribuyentes que en los últimos tres ejercicios, en los últimos tres años, no arrojan impuesto determinado alguno es decir, durante los ejercicios 1996, 1997 y 1998.

Aquí está la lista a la que yo llamaría de la vergüenza porque realmente no hay nada que pueda justificar esto. Y voy a citar algunos nombres porque es tan grande la lista de las empresas o grandes contribuyentes que no pagan que es asombroso cómo el gobierno no toma ninguna medida.

Cuando leo esta lista me siento mal como argentino porque veo que los grandes contribuyentes del país no pagan sus impuestos. Mientras tanto, la Dirección General Impositiva se dedica a perseguir a los pequeños y medianos contribuyentes. Vemos que hay miles de inspectores desparrramados por el país para cerrar pequeños y medianos comercios que pertenecen a personas que a veces apenas pueden subsistir. No obstante ello, la DGI los persigue tenazmente, como ocurre en todo el país. Repito: los únicos perseguidos por la Dirección General Impositiva son los pequeños y medianos comerciantes y empresarios.

En la Argentina se han cerrado más del 50 por ciento de las pequeñas empresas, que no han podido subsistir como consecuencia de este modelo económico que ha hecho que solamente el 10 por ciento de los argentinos se lleve el 36 por ciento de la riqueza. Y hoy, como nunca en la historia argentina, según informes del Banco Mundial, hay 13.400.000 personas que viven por debajo del índice de pobreza y 10.200.000 que ganan menos de 148 pesos mensuales.

Este modelo económico es el modelo de la Argentina pobre con empresas ricas, con un grupito de millonarios que viven llevándose la riqueza. Así se ha creado un país en el que la pobreza y la miseria están afectando al grueso de la población de la Argentina, donde existen más de 4.000.000 de niños por debajo del índice de pobreza.

Todos estos datos nos demuestran que este modelo económico ha llevado al país a su peor situación histórica porque nunca jamás en la Argentina existieron tantos pobres ni tanta miseria y porque jamás estuvo copada, como lo está hoy, por los grandes capitales extranjeros y por las multinacionales que están dominando todo el mercado de nuestro país y llevándose toda la riqueza mientras los trabajadores empobrecidos buscan trabajo.

Se ha llegado a un índice de desocupación brutal y a la existencia de salarios magros y de horarios de esclavitud porque ya ni se respetan las ocho horas de trabajo. Se trabajan diez o hasta doce horas diarias y los privilegios para el capitalismo son cada día más deleznable, razón por la cual la reacción del pueblo evidentemente tiene que ir surgiendo con más fuerza.

Todos estos datos nos demuestran que hoy el país dejó de ser la Argentina rica para transformarse en la Argentina pobre, en la Argentina de Sudamérica, donde solamente tienen privilegios los grandes empresarios, los grandes capitales y las multinacionales. Y los bancos, que por desgracia han pasado a ser extranjeros –de casualidad se salvaron el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires–, se llevan los ahorros argentinos para hacer negocios en nuestro país o en el exterior.

¡Hasta la banca está dominada por el capital extranjero y llena de privilegios, mientras los ciudadanos argentinos están cada día más pobres!.

Ahí está el campo, con más de un millón de personas clamando por situaciones que no se solucionan ni se van a solucionar. Mientras tanto, se llenan de privilegios a las empresas automotrices, que apenas ocupan a 17.000 personas; se llenan de privilegios a los bancos y también a las empresas petroleras, situación que se ve agravada por el hecho de que nos hemos privado de la empresa más importante, YPF, que le daba vida a la Patagonia y al Norte argentinos.

Ningún país del mundo –ni Italia ni Francia ni Inglaterra, ni Holanda ni Brasil ni México ni Venezuela, por ejemplo– se desprendió de su empresa petrolera nacional porque de esa manera manejan toda la política energética.

Hoy, en nuestro país, YPF no sólo ya no es argentina sino que hay un negociado digitado por el gobierno para entregarla a Repsol, una empresa estatal española, y de esa forma transformar todo el sector energético en un monopolio que estará al servicio del capital extranjero e irá en perjuicio de los argentinos, por cuanto YPF ya no regulará el mercado de los combustibles en el país.

Esta es la Argentina de hoy. Ha sido totalmente vaciada porque no tiene más sus empresas ya que todas pasaron al capital privado o extranjero. Este modelo económico lo único que ha legado son deudas, deudas y más deudas y, como consecuencia de ello, el empobrecimiento generalizado...

**Sr. Branda.** – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Maglietti.** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente** (Losada). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** – Señor presidente: quiero preguntar si estamos tratando la Ley Antimonopolios o el recorte presupuestario.

**Sr. Presidente** (Losada). – Continúa en uso de la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** – Señor presidente: está todo relacionado. Hablamos de un recorte presupuestario de unos pocos millones de pesos mientras explico lo que sucede en el país con las grandes empresas que no pagan sus impuestos como corresponde y que implican miles de millones de pesos. No hablamos de cincuenta, cien, doscientos o quinientos millones. Hablamos de miles de millones y lo que cuestionamos es por qué se hacen estos recortes miserables mientras se permite a las grandes empresas, que se han llevado el patrimonio y la riqueza argentina, que no paguen los respectivos impuestos.

Esto es lo más grave que sucede en la Argentina y, sin embargo, el gobierno no toma ninguna medida porque consiente que esos miles de millones de pesos se vayan del país en lugar de quedar como recursos provenientes del pago de impuestos.

Para no extenderme demasiado y colaborar con los señores senadores, voy a volver a la lista que ha enviado la Dirección General Impositiva.

En esa lista se encuentran las empresas más importantes del país. Leeré algunas: Siderca, Audinac, Klaukol, Swift Armour, Etam, Odol, Droguería Suizo Argentina, IECSA Sociedad Anónima, Castrol Argentina Sociedad Anónima, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, Banco Macro Misiones, Cerámicas Zanon, Honda Motor Argentina, Banca Nazionale del Lavoro S.A., Banco Itaú, The Chase Manhattan Bank, Banque Nationale de Paris, Iveco Argentina S.A., Yabito S.A., Supermercado Mayorista Makro, Joyería Ricciardi, Impregilo Dumez y Asociados, Techint, Dunlop Argentina, etcétera. Hay páginas y páginas de grandes contribuyentes que no pagan, pero continuaré con algunas muy conocidas como BAESA

S.A., Electrodomésticos Whirlpool, Aerolíneas Argentinas, Edenor y Edesur, más allá del bonito ejemplo que nos ha dado con los últimos problemas energéticos una de estas empresas.

También están la AFJP Siembra, La Caja de Ahorro y Seguro, Banco Caja de Ahorro, Ford Argentina, Fiat Auto, Banco Supervielle, Casa Tía, Exxon Argentina, Shell, YPF Gas S.A., Boston Company Argentina, ABN Amro Bank, Bank of America, Omega Seguros, Ciccone Calcográfica Sociedad Anónima. Eso les ha de recordar a esa famosa sociedad...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente** (Losada). — No dialoguen, señores senadores.

**Sr. Maglietti**. — También están incluidas Phillips Argentina, Iggam, Canale S.A., Philco Argentina, Astra S.A., Isaura, Fate, Nabisco, Molinos Río de la Plata, La Papelera del Plata...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Maglietti**. — ¿Cómo dice, señor senador? Le concedo una interrupción...

**Sr. Presidente** (Losada). — Por favor, no dialoguen. No se puede dar el uso de la palabra sin autorización de la Presidencia.

**Sr. Maglietti**. — Señor presidente: casualmente, como los señores senadores de la bancada justicialista están interesados en lo que estoy leyendo, si alguno de ellos quiere una interrupción, con gusto se la concedo.

**Sr. Presidente** (Losada). — Ya le voy a avisar si se la solicitan, señor senador. Continúe.

**Sr. Maglietti**. — También están incluidas Neumáticos Goodyear, Pirelli, Agfa Gevaert, Mercedes Benz Argentina, BGH, Volkswagen, Merck Sharp & Dohme, Unitan S.A., Bunge y Born, ESSO S.A., Texaco Petrolera, Aluar, Mercado de Valores de Buenos Aires, Olivetti Argentina, Coca-Cola, Michelin Argentina.

Como verán los señores senadores, podemos estar una hora enumerando las grandes empresas o grandes contribuyentes que no pagan impuestos.

Acá, señor presidente, yo diría algo muy importante: a confesión de parte, relevo de pruebas. El gobierno, a través de su informe, está confesando varias cosas. En primer lugar, confiesa que no tiene información ni idea de lo qué realmente es o de cuál es el monto de la evasión en concepto de ganancias y de IVA. Está confesando que la mayor parte de los grandes contribuyentes no paga im-

puesto a las ganancias en estos tres últimos ejercicios.

En una palabra, está confesando su absoluta, tremenda, grave y terrible irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo es posible que este país pueda salir de la crisis que está viviendo, si no se toman las medidas necesarias para recaudar aunque sea una parte importante de todo lo que no se recauda?

Creo que esto habría que tomarlo con toda la seriedad del caso, porque me parece que es gravísimo. Y creo que esto sucede sólo en la Argentina. No creo que pase en ningún país del mundo, especialmente en ningún país desarrollado. Pero ocurre acá, en la Argentina.

En ese sentido, señor presidente, los legisladores repasamos ítem, puntos del presupuesto, para ver qué podemos recortar, qué les sacamos a las provincias, qué recursos podemos sacar de un punto o de otro, para poder cumplir con los compromisos internacionales y poder pagar los enormes intereses de la deuda externa. Esta deuda de intereses pasó de 2.900 millones de pesos en 1989 a 8.800 millones de dólares en el año 1998, lo que nos demuestra que la Argentina es un país endeudado, que vive de endeudamiento en endeudamiento.

Este gobierno le va a legar al próximo un salvavidas de plomo. Porque nos guste o no, en esta carrera de endeudamiento en la que hoy el país se encuentra y considerando el déficit que estamos sufriendo, evidentemente, el sistema de convertibilidad, tarde o temprano, va a entrar en crisis.

No lo digo yo, señor presidente. Lo dicen los economistas. Especialmente hay que leer lo que dicen, muchas veces, los economistas que están fuera del país. Porque, desgraciadamente, muchos economistas argentinos, al servicio de los grandes capitales con sus consultoras, tienen coincidencias y pequeños matices de diferencia. En definitiva, nunca podemos saber lo que realmente está pasando en la Argentina, cómo pasó con el producto bruto interno, respecto del cual, de la noche a la mañana, nos enteramos de que en realidad somos un diez por ciento más pobres.

Entonces, quiero saber dónde está la verdad de la cuestión. También quiero saber otras cosas. ¿Por qué la Argentina tiene sus fondos depositados en el banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos percibiendo un 6 por ciento anual de interés, mientras que cuando necesita dinero lo toma al 12 por ciento, pero no utiliza parte de sus reservas, que superan los 15 mil millones con relación al circulante del país?

Los interrogantes son muchos y los problemas son demasiados. Este recorte presupuestario debe ser rechazado, como bien lo hizo la Cámara de Diputados.

Por eso termino diciendo que nosotros sostenemos y apoyamos la sanción de la Cámara de Diputados. En consecuencia, no estamos de acuerdo con el dictamen de mayoría, por lo que vamos a votar por la negativa.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: puntualmente quiero referirme a algunos aspectos del dictamen que tienen que ver, en primer lugar, con la provincia de La Rioja, a raíz de algunos comentarios que escuché de algunos señores senadores y que leí en los medios periodísticos en los últimos días.

Además, quisiera valorizar el trabajo que se hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el ingeniero Verna. Digo esto con mucha lealtad. Pongo como ejemplo el caso del Instituto Malbrán. Los compañeros trabajadores de esa institución, las comisiones internas y profesionales, no las autoridades, se movilizaron y vinieron al Senado. Conversaron con el presidente de la comisión y se buscaron alternativas para poder restablecer el equilibrio presupuestario del Instituto Malbrán. Como todos saben, este instituto presta servicios en materia de salud a todas las provincias argentinas. Es decir, atiende temas relativos a la salud de cualquier provincia argentina.

Como decía, los trabajadores fueron escuchados por la comisión. Se buscaron alternativas de financiamiento dentro del marco del recorte presupuestario, que somos conscientes tenemos que realizar por la crisis que afecta a nuestro país como consecuencia del problema que existe en la economía brasileña.

En ese marco de necesidad de reducir gastos, la comisión realizó un trabajo de privilegiar áreas, fortalecer otras, recortando gastos improductivos donde era necesario. Quizá uno espera que esta tarea la hagan los técnicos de los distintos ministerios de Economía, no el Congreso. El Ministerio de Economía lo que hace es poner los números arriba de la mesa y producir el recorte. Somos los representantes de las provincias argentinas, los representantes de los sectores sociales, los que tenemos que discernir –para eso está el equilibrio de poderes– dónde tenemos que ajustar y dónde conviene recortar para no perjudicar sensiblemente áreas y servicios esenciales, como la educación –en ese caso, restablecimos el equilibrio presupues-

tario–, la salud o la transferencia de recursos a las provincias argentinas.

Particularmente quiero valorizar el trabajo que se hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en este tema. Cuando viene un proyecto relacionado con el presupuesto, quizá estamos acostumbrados –a quienes nos toca ser oficialistas y a los que les tocó serlo en su momento– a tratarlo poco menos que a libro cerrado. Pero en esta oportunidad, en el Senado se puso sobre la mesa la realidad y se comenzó a trabajar sobre este recorte y hoy tenemos este dictamen que, dentro de las limitaciones del caso, compensa y satisface bastante los reclamos de muchos sectores sociales que se movilizaron, como los de la salud y de la educación, como el caso del Instituto Malbrán que mencioné, o el de las provincias argentinas, cuyos gobernadores se reunieron con el Estado nacional para trabajar en torno a este tema.

Me voy a referir a algunos conceptos que he escuchado, respecto de los aportes del Tesoro nacional –los ATN–. Otra vez se ataca a mi provincia, desconociéndose la realidad acerca de dónde proviene el financiamiento a través de los ATN, que en su momento fue un acuerdo de todas las provincias durante el gobierno del doctor Alfonsín, a los efectos de que La Rioja pudiera financiar –a través de esa partida presupuestaria– el desfinanciamiento que le produjo aquella ley de coparticipación federal de la época de Alfonsín. Y si no, veamos lo que recibía La Rioja en 1987 y lo que recibe ahora. Vamos a ver que los porcentajes son mayores en la época del gobierno radical, como consecuencia del profundo desfinanciamiento que tuvo mi provincia.

Ese financiamiento del déficit del estado provincial fue a los salarios de nuestros trabajadores y a los jubilados, que ahora están transferidos a la Nación, también producto de pactos fiscales entre la provincia y la Nación. Esos aportes del Tesoro nacional fueron convalidados a través de las sucesivas administraciones y ministros de Economía y de Interior que pasaron en los dos gobiernos, tanto radical como justicialista. Pasaron Tróccoli, Sourrouille, Brodersohn, Cavallo, Manzano y Mera Figueroa. Pasaron todos los ministros, firmando acts y convalidando ese financiamiento.

Entonces, que nunca más se utilice este tema como bandera para atacar a una provincia, como si hubiese sido un invento del presidente Menem para privilegiar, por debajo de la mesa, a su provincia. Esto es simplemente hasta que se dicte la nueva ley de coparticipación federal. Mientras tanto, continúa este acuerdo que se dio entre la Nación y

las provincias argentinas, a través del cual se reconoció el profundo desfinanciamiento que tenía mi provincia en el pago de los servicios públicos esenciales y en el salario de sus trabajadores.

Escuché de parte del señor senador Altuna decir ligeramente que, aparentemente, fue aumentando el gasto en el rubro aportes del Tesoro nacional para favorecer a la Rioja. Y nosotros vemos que es absolutamente todo lo contrario.

El Ministerio del Interior, a través del recorte presupuestario del año pasado, tenía congelados 119 millones de pesos, con el acuerdo que existía de que este año iba a ser habilitado ese monto.

Lo que hace esta modificación del dictamen es habilitar sólo 40 millones de los 119. Es totalmente al revés de lo que plantea el señor senador radical por el Chubut. No es que se está aumentando el gasto, sino que se está reduciendo en aproximadamente 80 millones, porque había disponibles 119 millones por el acuerdo presupuestario del año pasado y sólo se habilitan 40 millones.

Esos recursos son de las provincias argentinas. Los aportes del Tesoro nacional son de las provincias argentinas. Simplemente quiero poner de manifiesto que estoy seguro de que el gobernador radical del Chubut –Maestro– está totalmente en desacuerdo con lo manifestado por el señor senador Altuna.

Inclusive hasta escuchamos las quejas de senadores nacionales de mi partido por el Chubut, en cuanto a la relación que tiene el Ministerio del Interior, a través de los aportes del Tesoro nacional, con el gobierno y con la provincia del Chubut.

Estoy seguro de que si el gobernador Maestro pudiese hablar ahora por teléfono con el señor senador Altuna, representante de su provincia en el Senado, le diría: “Callate la boca que estás metiendo los dedos en el ventilador”. Esto lo digo con respeto y con afecto. Los aportes del Tesoro nacional no son de La Rioja sino de las provincias argentinas. A través de un acuerdo con ellas, se financia parte del déficit que se generó en La Rioja por la nueva ley de coparticipación durante el anterior gobierno radical.

Entonces, terminemos con esa cantinela de los ATN. No estamos aumentando la partida de ATN, la estamos reduciendo. El Ministerio del Interior tenía 119 millones disponibles en el presupuesto de este año por acuerdo en el recorte del año pasado; se habilitan sólo 40 millones y se mantienen congelados 80 millones.

Le concedo la interrupción al señor senador por el Chubut.

**Sr. Presidente** (Losada). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Altuna.** – Señor presidente: con el mismo afecto, le voy a decir al señor senador Yoma que si hoy hablásemos con Maestro le exhibiríamos estos datos, que son de la vida real de la República. Son los fondos de todas las provincias, como muy bien expresa el señor senador, porque esto se debe a la Ley de Coparticipación Federal –la 23.548– que impone la retención a la masa impositiva que recauda la Nación del 1 por ciento para constituir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Además, hay un porcentaje –honestamente, no lo recuerdo en este momento– que también se quita del impuesto a las ganancias.

Este fondo, señores senadores, es el fondo de todas las provincias. Y yo me dirigí con todo afecto a la provincia de La Rioja; no la estoy atacando pero, como dije anteriormente, me parece una injusticia que dicha provincia recibiera en el año 96 –no sé lo que ocurrirá en este momento, pero ubíquemonos en el año 96– 21 millones de pesos mensuales. Esa es la cifra que recibió, en promedio, la provincia de La Rioja. Mi provincia, el Chubut, recibió 4.600.000 pesos en todo el año referido. Entonces, ¿qué me va a decir el gobernador Maestro cuando le mencione estas cifras? La respuesta la descontamos todos.

Pero lo cierto es que sobre este tema, que tal vez pueda molestar, este Senado tiene que volver; debe analizar esta situación. Ya aquí, en mi corta experiencia, he visto el reiterado pedido de señores senadores para que concurra a este recinto el señor ministro del Interior y nos aclare con la verdad en la mano cómo es el reparto de los aportes del Tesoro nacional. Porque La Rioja tendrá sus problemas –lo entiendo–, tendrá sus trabajadores –lo entiendo–; pero ¿qué tenemos las demás provincias? También tenemos problemas y también tenemos trabajadores.

Así que sobre este tema –aunque parezca molesto– vamos a seguir insistiendo y ojalá el señor ministro del Interior tenga la bondad de venir a este recinto a explicarnos cuáles son los parámetros que se toman en cuenta en la distribución de estos fondos que pertenecen a todas las provincias.

Señores senadores: celebro esta discusión, porque en este Senado tenemos que hablar con la claridad y con los números a la vista, porque estamos refiriéndonos, nada más y nada menos, que al esfuerzo de la República.

Este presupuesto de la Nación condensa...

**Varios señores senadores.** – Era una interrupción, señor presidente...

**Sr. Presidente** (Losada). – Señor senador: lamentablemente, esta Presidencia no puede habilitar una nueva exposición. Simplemente, le ha cedido el uso de la palabra para una aclaración. Así que le pido al señor senador, sin pretender rigidez reglamentaria, que respete las características de la interrupción.

**Sr. Altuna.** – Bueno, ya termino, señor presidente.

Cuando hagamos el nuevo presupuesto para el año 2000, vamos a seguir conversando sobre este tema, lo vamos a analizar como corresponde, sin las pasiones provinciales que nos pueden afectar y alterar en el juicio justo, y vamos entonces a encontrar el verdadero equilibrio, la verdadera equanimidad y la verdadera justicia en estos fondos, que son federales.

Nosotros, como ya se ha expresado aquí, tenemos la obligación de defender el federalismo y a cada una de nuestras provincias.

**Sr. Presidente** (Losada). – Continúa en uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

La Presidencia reitera a los señores senadores que tienen derecho a pedir el uso de la palabra pero no a realizar más de una exposición porque, de lo contrario, evidentemente no estaríamos adecuándonos a lo que reglamentariamente corresponde.

**Sr. Yoma.** – Quería referirme a dos puntos, señor presidente. Con toda lealtad debo decir al señor senador por el Chubut que está absolutamente desinformado, en primer lugar, porque la masa de aportes del Tesoro nacional, de acuerdo con la ley 23.548, está conformada por el 3 por ciento de la masa coparticipable y no por el 1 por ciento.

En segundo término, la información según la cual como promedio La Rioja recibió 21 millones de pesos es absolutamente disparatada. Quiero creer en la buena fe del señor senador, pero considero que hizo mención de una información total y absolutamente errónea, a no ser que se tomen en cuenta los fondos de coparticipación federal que diariamente ingresan a La Rioja, al igual que al resto de las provincias argentinas.

**Sr. Altuna.** – No, no, señor senador. ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: no concederé más interrupciones porque cada vez que lo hago, el senador realiza un discurso.

En tercer lugar, debo hacer el siguiente comentario. Y lo hago desde la autoridad que me otorga el hecho de que, en oportunidad de desempeñarme como diputado nacional, de alguna manera posi-

lité con mi voto que el gobierno peronista del doctor Carlos Menem pagase la deuda que en concepto de regalías tenía congelada la provincia del Chubut por decisión del gobierno del doctor Alfonsín, a través del ministro Terragno.

En aquel entonces, se congeló una deuda por 500 millones de dólares que la Nación debía a la provincia del Chubut, como dije antes, en concepto de regalías. Y este presidente de la Nación, durante este gobierno, pagó dicha deuda. La Rioja no goza de regalías y, en consecuencia, debe buscar la manera de financiar el déficit de su Estado provincial, máxime teniendo en cuenta la falta de recursos naturales como los que puede tener una provincia petrolera, que genera cientos de millones de dólares al año, para disponibilidad del respectivo gobierno provincial.

Entonces, quien habla, cuando se desempeñó como diputado nacional, votó a favor del pago de la deuda congelada en concepto de regalías con la provincia del Chubut, posibilitando con su voto que el gobierno nacional hiciera frente a una deuda histórica que generó el gobierno del doctor Alfonsín a través de su ministro de Obras Públicas, doctor Terragno.

Creo que es muy negativo intentar la defensa de los intereses de nuestras provincias atacando a las provincias hermanas. Esto no puede ocurrir. En esta Cámara, en este Congreso de la Nación, permanentemente damos muestras de solidaridad entre las provincias argentinas.

Señor presidente: para finalizar, quiero referirme muy brevemente al famoso tema de las jubilaciones, adelantando mi voto en contra del tope jubilatorio.

Lo haré desde la autoridad que también me otorga saber que no defiendo ningún interés personal: no cobro jubilación alguna y ninguno de mis parientes es jubilado. En consecuencia, no existe otro interés que no sea el que voy a explicitar que me lleve a votar en contra del tope jubilatorio.

La Rioja, señor presidente, fue una de las diez provincias argentinas prácticamente compelidas por la Nación en el pacto fiscal a transferir su régimen previsional. Junto con ello, venían los distintos regímenes –el 82 por ciento móvil, las leyes de jubilaciones especiales, etcétera–. Y, como en toda provincia que privatizó su banco y vendió sus empresas públicas, apelamos al recurso de las jubilaciones anticipadas para producir el retiro de los trabajadores –no de los funcionarios– de los bancos o empresas públicas.

De allí aparecieron los regímenes especiales; como consecuencia de que para a jubilarse sólo

eran necesarios 15 o 20 años de aporte –no 30–, sin límite de edad –ya no con 65 años–. También hablo con la autoridad de haber sido uno de los que se opuso con mayor fervor tanto a la privatización del banco de la provincia como a la transferencia del régimen previsional en La Rioja.

Incluso, muchos trabajadores fueron compelidos a jubilarse, tanto en La Rioja como en muchas otras provincias, a los que se les decía “o te jubilás o quedás cesante porque el banco o la empresa pública se privatiza” y no tenían otro remedio; y por desinformación de los medios y de parte de la dirigencia política hoy pasan a tener el mote de “jubilados truchos”.

Cuando la provincia transfirió su caja, su régimen previsional, la Nación nos dijo –como a todas las provincias argentinas–: “Señores, transfieran sus cajas porque se van a respetar los derechos adquiridos”. ¿Qué pasaba? ¿De pronto la Nación hacía filantropía, quería hacerse cargo de las cajas deficitarias de los estados provinciales? No; a la Nación le interesaban, obviamente, los activos que aportaban al sistema de capitalización y que dejaran de aportar a las provincias para pasar a aportar a dicho sistema. Este fue el sentido del pacto fiscal celebrado entre la Nación y las provincias. Este fue el sentido por el cual se impulsó la transferencia de las cajas previsionales.

Ahora que las provincias privatizaron sus bancos y empresas públicas –entre ellas, La Rioja– y que transfirieron sus cajas, incluso con la oposición de muchos sectores –en el caso de mi provincia–, resulta que como legislador tengo que votar un tope en esa jubilación. No me interesa si se trata de jubilaciones altas, medias o bajas. Si ahora habilitamos un tope que viole derechos adquiridos, mañana va a venir otro gobierno al que pueden no cerrarle las cuentas y va a querer bajar ese tope a 2.000, por ejemplo; y luego va a venir otro gobierno que lo bajará a 1.000 porque las cuentas tampoco le cierran.

Entonces, no sólo se afecta al jubilado individualmente en la provincia, dado que se le recorta parte de su salario. Se afecta también, obviamente, la propia calidad de vida en el sentido de que el comercio, la actividad económica, el pequeño y el mediano comerciante dejan de recibir mensualmente un flujo de 2, 3 o 4 millones de pesos producto de ese recorte de las jubilaciones, ahondando por supuesto el proceso recesivo que estamos viendo –reitero– por coyunturas externas.

Entonces, digamos absolutamente las cosas como son e informemos cabalmente a la gente. No estamos tratando acá un recorte salarial sino

un recorte presupuestario. Si la Nación pone un tope a las jubilaciones de las provincias, pues también pongamos tope en los aportes. Obviamente, hacerse cargo del sistema previsional tiene como contrapartida que mandamos a nuestros aportantes. Si prácticamente fuimos obligados a transferir las cajas previsionales y a privatizar nuestras empresas públicas, ahora no podemos nosotros, desde el Congreso de la Nación, alterar las reglas del juego y violar derechos adquiridos.

Quiero recordar que, entre otras cosas, la privatización de YPF, además de transformarla en una empresa rentable y altamente competitiva –tal fue el éxito de la privatización–, sirvió para pagar parte de la deuda que generó el gobierno de Alfonsín a través del decreto de emergencia previsional por haber avanzado sobre derechos adquiridos con el famoso 82 por ciento móvil.

El gobernador de Córdoba, doctor De la Sota, debe enfrentar este tema. En esa provincia, se bajó también por decreto el 82 por ciento móvil al 71 por ciento. Hay una andanada de juicios tremenda, generada a partir de esta situación. El gobernador ha dicho públicamente que volverá a respetar el 82 por ciento móvil con la condición de que se llegue a un acuerdo y se retiren todas las causas judiciales, que pueden generar un quebranto absoluto en el estado provincial. Esto es consecuencia de violentar derechos adquiridos.

Reitero: no quiero abrir ninguna puerta para que el día de mañana se afecte a cientos y cientos de trabajadores jubilados de mi provincia, o de ninguna otra, a través de este tope. Ya hubo por ahí una propuesta de bajar el tope de 3.100 a 2.500 pesos, que llegó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero que no prosperó. Y, en este sentido, valoro el trabajo llevado a cabo en esta comisión, por cuanto para lograr el equilibrio necesario en esta transferencia a las provincias se produjo un mayor recorte en el rubro servicios no personales, como ser los viáticos de la Cancillería, de la Secretaría de Medio Ambiente, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o de otras áreas del gobierno, reuniendo los recursos para evitar que prosperara esta idea de bajar el tope en el tema jubilatorio. Entonces, reitero, como no quiero abrir la puerta para que se dé esta situación, voy a votar en contra de este tope.

Ahora bien, quiero reconocer lo siguiente. Desde el punto de vista jurídico, creo que este tope que se establece en el dictamen no puede posibilitar un quebranto al Estado a través de la promoción de juicios en su contra. ¿Por qué digo esto? Porque no se le está quitando un derecho al traba-

jador, sino que se le está postergando la efectivización de parte de su salario, es decir que se le entrega un bono y en seis meses se le paga en efectivo.

Como se puede apreciar, se trata de una modalidad de pago; lo que es muy distinto al tope. Y, en este sentido, hay vasta jurisprudencia que reconoce que ante situaciones de emergencia –como la que estamos viviendo– se puede establecer una postergación del pago del salario o del aguinaldo, o incluso fijar su pago en cuotas.

Reitero que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se cuidó muy bien de evitar un futuro quebranto del Estado por la promoción de juicios en su contra, que es lo que sucedió con la Nación, con el tema de la emergencia previsional, o lo que está ocurriendo en varias provincias argentinas –como Córdoba–, por no haber tratado correctamente el tema.

**Sr. Sala.** – ¿Me concede una interrupción, señor senador?

**Sr. Yoma.** – Sí, señor senador.

**Sr. Presidente** (Losada). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sala.** – Señor presidente: no quisiera que finalizara la exposición del señor senador Yoma y quedara en el ambiente una cuestión entre chubutenses y riojanos, porque el principio que reina en esta Cámara es el de que siempre se respaldan y apoyan las conquistas que, en defensa de sus intereses, las distintas provincias logran del gobierno nacional.

En este sentido, mi provincia fue acompañada unánimemente por todos los miembros de este cuerpo en el tratamiento de los temas vinculados con el reembolso por puertos patagónicos y el subsidio en el consumo de gas, que son cifras que nos llegan mensualmente. Y si bien nosotros teníamos fundamentos para respaldar estos temas, es cierto que ellos no se hubiesen concretado sin el apoyo que tuvimos de la totalidad de los miembros de la Cámara.

Por lo tanto, en este tema de la provincia de La Rioja, creo que si bien no fueron felices las palabras pronunciadas por el señor senador Altuna, entiendo que él comparte lo que estoy diciendo. En consecuencia, nosotros apoyamos lo que tenga que ver con las aspiraciones de las provincias y la posibilidad de contar con fondos y recursos para sus gestiones.

**Sr. Altuna.** – ¿Me concede una interrupción, señor senador?

**Sr. Yoma.** – Pero breve, porque ya termino.

**Sr. Altuna.** – Quisiera contestar algo que señaló el señor senador Sala.

**Sr. Presidente** (Losada). – Señor senador: una cosa es polemizar con el orador que está exponiendo y, otra, hacerlo en general.

Si el señor senador por La Rioja le concede la interrupción, no hay problema, pero esta Presidencia no puede darle el uso de la palabra para efectuar una aclaración de una aclaración, sin que ello signifique limitar su derecho a opinar.

Continúa en uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: en este dictamen no escondemos para nada la existencia de un reclamo por deudas que la provincia de La Rioja tiene con el Ministerio del Interior, por transferencias no realizadas de compromisos asumidos. En este sentido, tenemos el legítimo derecho de exigir el cumplimiento de esas obligaciones que la Nación tomó con nuestra provincia.

Como decía el señor senador Sala, quiero poner absolutamente de manifiesto la solidaridad del resto de las provincias argentinas ante un problema puntual planteado por La Rioja. Cuando se traten problemas de otras provincias argentinas, nos van a tener votando al lado de ellas, a favor de las reivindicaciones que planteen.

**Sr. Presidente** (Losada). – Para una aclaración tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Altuna.** – Señor presidente: quiero decir a mi colega y comprovinciano senador Sala que se puede quedar absolutamente tranquilo. Como no podría ser de otra manera, aquí no hay ninguna cuestión puntual entre dos provincias hermanas.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tenemos los senadores, entiendo que no hago nada mal al reconocer esta situación teniendo los números a la vista. Reitero que este asunto del aporte del Tesoro nacional a las provincias debe ser objeto de una revisión. Ahí sí vamos a aplicar el verdadero concepto de la solidaridad que debe existir entre las provincias hermanas.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Autonomista.

**Sr. Romero Feris.** – Señor presidente: teniendo en cuenta el tiempo que llevamos sesionando y los temas que se han abordado, trataré de ser lo más concreto y breve posible. Calculo que en diez minutos voy a terminar mi exposición.

Señor presidente: viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados este proyecto de ley por el cual se deja sin efecto lo dispuesto por los

artículos 8° y 9° del decreto 455/99 del Poder Ejecutivo nacional. Este tema se debe tratar en forma conjunta con el proyecto presentado por el señor representante de San Juan senador José Luis Gioja, registrado con el número 741/99.

En primer término, en nombre del bloque autonomista, quiero dejar expresa constancia del rechazo total al mencionado decreto por el cual el Poder Ejecutivo una vez más avanzó ilegítimamente sobre atribuciones exclusivas e indelegables que acuerda la Constitución Nacional a este Congreso de la Nación.

Estas características inconstitucionales de la norma que hoy tratamos fueron ya severamente cuestionadas por mi parte cuando hace un tiempo debatimos en este recinto el recorte presupuestario para el sector educativo. Igualmente, por sendos proyectos de resolución rechacé de modo expreso los recortes intentados por el Poder Ejecutivo respecto del Fondo Especial del Tabaco y del Fondo Nacional de la Vivienda, en los mismos artículos cuya derogación hoy se propicia.

Adviértase que este avance sobre las facultades del Congreso ha llegado a extenderse inclusive sobre leyes-convenio, como la del Fondo Nacional de la Vivienda, suspendiendo de modo unilateral su obligación de abonar la garantía mensual, por lo que nos encontramos ante un verdadero atropello federal. Al encontrarse carentes de garantía los planes provinciales de vivienda, quedan impedidos de cumplir con los compromisos asumidos y, aún más, de proyectar la realización de obras que satisfagan una de las mayores deficiencias de la estructura social argentina, como es la falta de vivienda, cuyo déficit estimado es del orden de las 3 millones de unidades. Esta medida se vuelve entonces contra los sectores más desprotegidos, cerrándoles su única posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Asimismo, señor presidente, cuando tratamos los recortes al presupuesto de educación destaqué que ni siquiera se habían guardado los requisitos formales exigidos por el artículo 99, inciso 3) de la Constitución Nacional, dado que el decreto de necesidad y urgencia no fue refrendado por la totalidad de los miembros del gabinete.

De igual manera destaco que esas razones de urgencia esgrimidas, así como la emergencia fiscal invocada no son sino las consecuencias de haberse propuesto y aprobado un presupuesto desmedido tanto en los gastos incluidos como en la proyección de ingresos calculada para el corriente año.

La recaudación entonces estimada como probable para este ejercicio estaba lejos de compade-

cerse con las reales posibilidades que la crisis brasileña de enero vino a dejar en total descubierto.

Fueron esas razones —exceso de gastos y estimación infundada de recursos— las que motivaron fundamentalmente mi rechazo a dicho proyecto presupuestario. Esas causas me llevaron, a principios de marzo, a presentar un proyecto de declaración ante el panorama claramente comprobable de deterioro de la situación económica y financiera del país, y su proyección sobre el conjunto de las actividades productivas, instando al gobierno federal —y por su intermedio a los gobiernos provinciales y a todo ente que utilizare fondos públicos— a la más rigurosa austeridad, de forma tal que pudieran brindarse plenamente los servicios públicos esenciales a cargo del Estado.

Manifestaba entonces que los ahorros que se generasen evitarían restricciones no deseadas sobre rubros fundamentales dispuestos según criterios no siempre compatibles desde las perspectivas y necesidades de la gente. Así, apenas dos meses más tarde, nos hallamos ante este decreto de necesidad y urgencia que pretendió recortar de modo arbitrario tanto gastos corrientes como de capital, sin tasa ni medida, afectando así conceptos esenciales como la educación —recorte ya rechazado por este Congreso—, la vivienda, la salud y la previsión social, señor presidente.

El repudio generalizado que provocaron esas normas en todos los sectores mencionados encontró su eco natural en este Congreso. Ambas Cámaras sancionaron casi de inmediato proyectos de ley correctivos que dejaron sin efecto diferentes aspectos de aquel decreto.

Ahora bien, examinando en concreto el texto en revisión vemos que en el ínterin transcurrido entre la sanción original de esta propuesta y este debate existió un acuerdo celebrado entre los gobernadores del oficialismo y la conducción económica.

Tardíamente algunos de los restantes gobiernos provinciales aceptaron agregarse a dicho convenio.

Por mi parte ratifico por completo mis discrepancias con los términos de aquel acuerdo que mediante dictamen se procura transformar en ley. Según mi criterio no se ha demostrado de modo fehaciente que únicamente por esta vía se logre la reducción del déficit fiscal. Existen otros muchos y muy variados gastos que son pasibles de disminución. Vemos así como continúan las giras presidenciales con sus numerosas comitivas. Los gastos reservados no han sufrido recortes y se ha mantenido intacta la discrecionalidad en el manejo

de los fondos de aportes del Tesoro nacional por parte del Ministerio del Interior, que ha continuado respondiendo a negocios políticos, como se lo ha denunciado repetidamente en este cuerpo, en lugar de atender a verdaderas necesidades federales.

Como estos, existen muchos otros rubros que, efectivamente, pudieron ajustarse.

Tampoco estamos muy convencidos de que la recaudación no se haya podido mejorar. Era muy probable –lo manifestamos ya a fines del año pasado– que se desatara una recesión. Y su consecuencia fiscal debía atenuarse a través de una mejoría de los sistemas de recaudación que evita-se una proyección mayor sobre el ingreso público. Pero nos hallamos ante la situación opuesta: cada vez se recauda menos y parecen vanos los intentos de controlar la evasión.

También debió acudir a sistemas de estímulo a la inversión y a generar actividades productivas. Pero frente a una situación que día a día se ha agravado ostensiblemente, el gobierno nacional se ha mantenido indiferente, tal vez, porque carente de soluciones ha sido su única forma de responder a los reclamos de la gente.

Señor presidente: como dije al comienzo, no quiero extenderme en demasía. No acepto de ninguna manera el texto propuesto, pero atendiendo al hecho de que por esta norma se derogan los artículos 8º, 9º y 10 del decreto 455/99, lo que coincide con mis anteriores proyectos, voy a prestar mi aprobación al proyecto en general y a expresar mi rechazo a los restantes artículos, por cuanto ellos agravan la situación ya apremiante de muchas provincias.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por San Juan del bloque Justicialista.

**Sr. Gioja.** – A esta altura del debate, voy a hacer pocas reflexiones y trataré de ser lo más breve posible, a fin de no reiterar algunos conceptos que se han vertido acá.

Creo que cuando se concibió el decreto 455, el objeto y el fin que se perseguían con él –o sea, la necesidad de controlar el déficit fiscal y de reducir gastos– eran compartidos por todos los que saben algo de economía en la Argentina. Indudablemente, quien elaboró ese decreto intentó cumplir con ese objetivo, a lo mejor, con algunas torpezas. Concretamente, digo esto porque represento a una provincia en la que había elecciones generales el domingo 16 de mayo y el efecto de este decreto apareció si no me equivoco, el lunes 10 de mayo. Así, al otro día, en mi provincia –reitero que esta-

ba en vísperas de elecciones– había diez mil estudiantes y profesores en la calle. Indudablemente, esto no nos hizo bien.

Posteriormente, hubo que rever el recorte que se establecía en ese decreto en lo referido a los temas educativo y de ciencia y técnica. Esa fue la primera modificación que introdujo este Parlamento, a través de un proyecto de ley que surgió en este Senado. Así, efectivamente se concretó esa modificación.

El decreto en cuestión contenía, básicamente, tres artículos que tenían relación con fondos de las provincias. Eran los artículos 8º, 9º y 10. Específicamente, el artículo 10 se refería a una sola provincia, la de Santa Cruz. A través de una gestión de los senadores que la representan, se pudo acordar la modificación de ese artículo, lo que está plasmado en el proyecto de ley en tratamiento, que hoy se intenta aprobar y cuya aprobación comparto.

Indudablemente, este decreto surgió como una decisión unilateral. De su elaboración no participaron las provincias ni sus responsables: los gobernadores. Así, por gestiones múltiples, posteriormente se generaron distintos encuentros entre los gobernadores de provincias y las autoridades económicas provinciales y nacionales. Finalmente, se pudo llegar a un acuerdo, tendiente a compartir la necesidad de ahorro, de recorte y de control del déficit de la Nación con recursos provinciales. Y creo que ello se logró de la mejor forma: convocando a los gobernadores e intentando lograr este acuerdo, que se ha plasmado en el proyecto de ley en consideración.

No quiero volver a hablar sobre temas que ya se han mencionado.

Todos sabemos que los ATN –los cuestionados ATN, entre comillas– son recursos de las provincias, que siempre están cuando ellas los requieren, cuando hay emergencias o necesidad de compensar desequilibrios en la coparticipación, como en el caso de la provincia de La Rioja.

Pero también “se había metido mano” a las partidas provinciales. Es así que el artículo 8º disponía una afectación del 12 por ciento de los recursos originados en leyes especiales o afectaciones de impuestos adicionales que se destinan a provincias. Ahí estaba el 4 por ciento del impuesto a las ganancias, el 10 por ciento del impuesto a las ganancias que va al Fondo del Conurbano Bonaerense y lo que sobra de ese 10 por ciento, con un tope de 650 millones, que también va a las provincias. También está el Fondo de Infraestructura Vial y fondos que tienen que ver con el desarrollo eléctrico.

Los gobernadores hacen este acuerdo porque – insisto– comparten la responsabilidad de que hagamos entre todos el esfuerzo de mantener la convertibilidad, que la Argentina siga siendo un país serio en sus cuentas y que este gran y preciado tesoro que hemos conquistado –la estabilidad– pueda seguir reinando en el país.

El objetivo de este proyecto de ley es reglar el acuerdo entre los gobernadores y las autoridades económicas nacionales. Esto es lo que está escrito.

No tengo los números exactos porque no es fácil calcularlos, pero diría que los ahorros que van a hacer las provincias argentinas, incluida la garantía del FONAVI, no sobrepasan los 220 millones de pesos. Aquí se ha dado alguna cifra que no es correcta. La garantía del FONAVI no supera los 120 millones de pesos. Debo recordar a todos que en el proyecto original de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a este Parlamento aparecía la baja de 120 millones de pesos en los fondos del FONAVI.

Creo que el acuerdo es razonable y, también, que grafica la intención de los gobiernos provinciales de prestar su colaboración. Las provincias no la están pasando bien en lo que hace a sus finanzas y a sus recursos, pero están haciendo el esfuerzo.

El plan de vivienda no se va a resentir, como se dijo aquí, porque se corte la garantía del FONAVI. Quiero que quede constancia de que las provincias van a poder usar estos ahorros para poder endeudarse, si así lo necesitan. Eso es parte del acuerdo y hace falta decirlo.

En consecuencia, este proyecto cumple acabadamente con el objetivo de mantener la posibilidad de que el Estado nacional pueda utilizar recursos provinciales para financiar su déficit y achicar el déficit fiscal. Me parece que esta es una buena norma. Quizás no sea la mejor pero es aceptable. De alguna manera grafica el esfuerzo de quienes componen este país, es decir, Nación y provincias.

Hay que decir que se reemplazaron recortes por reducciones en otras partidas que tienen que ver concretamente con el funcionamiento del Poder Ejecutivo nacional, como por ejemplo la referida a gastos reservados, pasajes y viáticos. Es bueno que ningún jubilado cobre más de 3.100 pesos. Así, entre todos, podremos hacer nuestro aporte para evitar que el déficit se “dispare” en la Argentina.

Por estas razones, señor presidente, voy a apoyar el presente dictamen.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por San Luis del bloque Justicialista.

**Sr. Sergnese.** – Señor presidente: voy a repetir algunas de las cosas que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra y trataré de ser muy breve, aclarando que aprobaré en general y en particular el proyecto en consideración. Sin embargo, no puedo dejar de hacer rápidamente dos o tres aclaraciones que en algunos aspectos han sido mencionadas.

En realidad, hubiera deseado la derogación lisa y llana del decreto 455. Así lo dije en oportunidad de tratarse los recortes a la educación, y no porque no esté de acuerdo con presupuestos equilibrados o en que se disminuyan los gastos en la medida en que no se obtienen los recursos estimados. Por el contrario. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Los presupuestos deben ser equilibrados porque permiten una correcta política económica a las provincias y a la Nación, que facilita la proyección, el análisis y la actividad económica de todos los sectores en la medida en que uno sabe exactamente cuáles serán los recursos y en qué se van a utilizar.

Indudablemente, los cálculos de la masa de recursos no se cumplieron, y el gobierno nacional, frente a ese problema, trató de encontrar una solución disminuyendo gastos con recortes presupuestarios.

En aquella oportunidad manifesté que los gastos que se deben eliminar cuando hay una situación de crisis y cuando los recursos no alcanzan son los innecesarios. Tenemos que tratar de mantener aquellos que generen una actividad productiva.

Lamentablemente, creo que quizás hubo una equivocación en el análisis porque se incluyeron algunos recortes que han generado problemas, como bien se ha manifestado. No obstante, recién lo ha dicho el señor senador Gioja, soy consciente de que hay un acuerdo entre la mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas, que saben que se los ha invitado a un ahorro forzoso. Lo han asumido y han aceptado hacer un esfuerzo para colaborar en la solución de este problema del gobierno nacional. Hago la aclaración de que el gobernador de San Luis no formalizó el acuerdo, lo cual no implica que no vaya a acatar la decisión de la mayoría, como yo lo hago en este momento. ¿Por qué? Porque creo que mantener en vigencia el decreto 455, más allá de realizar un debate más profundo para mejorar el proyecto que hoy seguramente se va a aprobar, implicaría un perjuicio cada día mayor para cada una de las provincias argentinas.

Creo que a veces hay que optar por el mal menor, y este es para mí uno de esos casos. Y no haré una relación con la ley de coparticipación federal, más allá de que me tocó participar en su redacción.

En aquellos años yo era ministro de Hacienda y Obras Públicas de la provincia de San Luis y fui uno de los que participaron y discutieron con fuerza con los representantes de todas las provincias argentinas para tratar de encontrar un acuerdo en la ley de coparticipación federal. Al final lo logramos y, como integrante del Foro de Ministros, vinimos en más de una oportunidad a este recinto a discutir los temas de la mencionada ley.

Por supuesto, la Ley de Coparticipación Federal establece con claridad cuáles son los impuestos que corresponden a las provincias, cuáles a la Nación y cuáles los coparticipables, pero me detendré en un solo tema, que es el de los aportes del Tesoro nacional o este fondo creado para dichos aportes. Estos se obtienen con el 1 por ciento del monto total coparticipable, cuyo destino se establece en la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, y el 2 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. Por el artículo 5º de esta ley se establece que se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrio de los gobiernos provinciales.

Claramente tienen un único destino posible: las provincias. Más aún, son fondos provinciales que administra el Ministerio del Interior. Son fondos genuinos de las provincias. Esto no sólo surge del destino exclusivo que les da la ley, sino que además se reafirma al expresarse que el Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación.

El Ministerio del Interior actúa por cuenta de las provincias al administrar esos fondos. La eventual utilización de estos para un destino distinto del previsto en la ley que los crea demanda que se provea su reposición a su destino legal.

En igual sentido se habría expresado el gobernador de La Rioja respecto de un recorte de 120 millones, en 1998, según una publicación de un diario.

Por ello, esta utilización sólo puede ser transitoria, como un manejo de caja. No voy a decir si está bien o si es prolijo o no. Pero lo que no puedo aceptar –y pido que, de alguna forma, se incluya en el proyecto– es que, con relación a los ATN, no haya una reposición, el año que viene o el otro, en una fecha a fijar, o en cuotas como se establece en los otros casos, cuando se habla del recorte que se hace por los aportes jubilatorios.

Soy consciente de que la comisión ha trabajado tratando de cumplir con las pautas y con el acuerdo realizado entre todos los gobernadores. En definitiva, daré mi aprobación. Pero creo que deberíamos establecer una forma de devolución a las provincias de esos recursos que, en el caso de los ATN, ya no constituyen un ahorro forzoso, sino una especie de donación, por lo menos, de mantenerse todo así. Si se estableciera una fecha de devolución, quizás, cambiaría el sentido.

Me permito decir esto siendo plenamente consciente de que la provincia de San Luis, en su momento, cuando se discutió la ley, autorizó expresamente la creación de este fondo y de que la idea de crearlo no tenía que ver con que se distribuyera a todas las provincias en forma igualitaria, porque para ello hubiera bastado con mantener los índices de la ley de coparticipación. No fue esa la intención. Se creó el fondo, justamente, para colaborar en la solución de los conflictos o de los desequilibrios fiscales provinciales. Es decir que tiene un destino específico.

Al respecto tengo, a veces, en el bloque, algunas palabras con mi compañero Jorge Yoma. Pero debo reconocer que tiene razón, que cuando se discutió el tema de la coparticipación federal se tomó especialmente en consideración un problema que tenía La Rioja en relación a este tema. Digo esto sin perjuicio de que los montos no son, quizás, los que se han estado transfiriendo, y de que hubiera preferido algunas medidas correctivas en este tema. Pero debo reconocer que fue uno de los motivos por los que se autorizaba alguna forma de colaboración adicional, porque también había un problema adicional. Esto no era por casualidad. Prácticamente, por aquella fecha, las tres provincias más humildes y con mayores dificultades eran justamente La Rioja, San Luis y Catamarca.

Con posterioridad, la provincia de San Luis pudo resolver sus conflictos. Desde hace prácticamente diez años tenemos presupuesto equilibrado, lo cual es muy conveniente y bueno. No hemos necesitado los aportes; por lo menos el Poder Ejecutivo provincial no los ha tenido. Esto no significa que algunos municipios, a través de este sistema, no hayan recibido la colaboración de los A.T.N., con montos mucho menores a los que han recibido otras provincias.

No quiero hacer de esto una cuestión de principios. Les pido un esfuerzo un poco mayor al que han realizado, si es factible. Si no, igualmente voy a votar el proyecto como está.

**Sr. Presidente (Losada).** – Tiene la palabra la señora senadora por el Neuquén.

**Sra. Sapag.** – Señor presidente: la Constitución de nuestra República en su artículo 75, inciso 19, dice que son atribuciones del Congreso: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas el Senado será Cámara de origen”.

Resulta que a pesar del mandato de la Constitución, hoy estamos dispuestos a votar una ley por la que vamos a acentuar el desequilibrio de las provincias.

Siempre se ha hecho hincapié en que el déficit fiscal de la Nación proviene de las provincias –yo creo que no es así– y pareciera que solamente este déficit puede ser salvado por las provincias.

Siendo representante del Neuquén, una provincia patagónica, quiero señalar que la Patagonia, con 700.000 kilómetros cuadrados de extensión, constituyendo la tercera parte del territorio de la Nación, tiene un índice de coparticipación que no alcanza al 8 por ciento. Asimismo, ha contribuido para pagar el déficit jubilatorio con un 15 por ciento de esa coparticipación, quedando para las provincias patagónicas un índice del 6,8 por ciento.

Pero no vengo aquí a plantear si una provincia recibe más o menos A.T.N., si recibe más o menos coparticipación. No tenemos que plantear antinomias entre nuestras provincias ni entre la provincia y la Nación. Por el contrario, la Nación y las provincias estamos juntas, pero parece que hubiera un Estado que está en contra de la Nación y de las provincias.

Con este recorte presupuestario que hoy se quiere votar, y que afecta a fondos específicos que hacen al funcionamiento de las provincias, como el Fondo de Desarrollo Vial, FONAVI, Fondo de Desarrollo Eléctrico para el Interior, hay una vuelta al recorte a las provincias y se vuelve a este desequilibrio.

Por lo tanto, adelanto mi voto en contra de este proyecto. Además, encuentro otra incongruencia. En esta Cámara estamos estudiando desde hace bastante tiempo la ley de coparticipación, una ley que tiene que ser equilibrada, distributiva, solidaria y estable, pero resulta que se ve atacada desde el Estado nacional con estas iniciativas que recortan nuestra participación.

Entonces, ante el desequilibrio insistente que se produce en nuestras economías regionales y ante esta incongruencia de votar hoy el proyecto en consideración y estar analizando una ley de coparticipación, adelanto mi voto negativo.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz del bloque Justicialista.

**Sr. Varizat.** – Señor presidente: cuando en este recinto se trataban hace algunas sesiones estos recortes presupuestarios del decreto 455, obviamente lo hacíamos respecto de los que tenían que ver con el presupuesto de la educación, apurados por la presión de los sectores y de la gente que estaba afuera de esta casa.

En esa oportunidad votamos favorablemente el proyecto que había presentado nuestro bloque, pero pedí la solidaridad y la comprensión de nuestros pares para dejar sujetos a revisión todos los artículos que tenían que ver con la afectación de las economías regionales.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados sancionaba un proyecto que anulaba o dejaba sin efecto los artículos 8º y 9º de este decreto, que también afectaban a las economías regionales, pero dejaba afuera uno al que yo también hice mención en esa sesión, que tenía que ver directamente con un beneficio otorgado a nuestra provincia en un acuerdo de 1994, que afectaba en un millón y medio de pesos mensuales a nuestra provincia.

Los senadores santacruceños presentamos inmediatamente un proyecto dejando sin efecto el artículo 10. Y en honor a la brevedad quiero resaltar también, como lo ha hecho algún otro legislador anteriormente, el trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de su presidente, del senador Gioja, juntamente con el Ministerio de Economía de la Nación y los gobernadores de provincia o sus representantes. Ellos hicieron a través de nuestro proyecto la inclusión correspondiente.

En el artículo 9º de este dictamen figura la anulación del artículo 10 de ese decreto. Y yo espero que la misma comprensión y solidaridad que tuvo este cuerpo se tenga también en el momento del giro correspondiente a la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** – Señor presidente: creo que soy el penúltimo orador, de tal modo que voy a procurar ser muy esquemático en la argumentación de nuestra posición.

Por otra parte, las exposiciones del señor senador Altuna y la de otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra han sido muy explícitas en cuanto a las objeciones al dictamen que se va a votar en pocos minutos.

En primer lugar, considero que es necesario señalar que la Cámara de Diputados aprobó por

abrumadora mayoría de votos un rechazo al recorte presupuestario que prevé el decreto 455 en materia de recursos provinciales. Quiere decir que nosotros estamos analizando en revisión este proyecto.

De tal modo que si aquí optásemos por el rechazo, pues el decreto de necesidad y urgencia 455 es una usurpación de las atribuciones del Congreso de la Nación para legislar en materia impositiva y también, obviamente, presupuestaria, quedaría derogado.

Seguramente primará la voluntad de la mayoría, y entonces este proyecto volverá con modificaciones a la Cámara de Diputados.

La primera cuestión, señor presidente, es de carácter formal. Entendemos que no es un tema de sencilla interpretación del artículo de la Constitución que establece, dentro de las atribuciones del Congreso, votar una ley de estas características.

Pero a la vez, establece una mayoría especial – calificada – en el artículo 75 inciso 3). Y planteo la observación, señor presidente, sin perjuicio de que nosotros finalmente votaremos en un sentido distinto de como lo hará el justicialismo, porque no es un tema sencillo de resolver y creo que frente a la Cámara de Diputados, si nosotros no hacemos al menos una evaluación de este tema, puede quedar como que ni siquiera hemos previsto los alcances de la norma citada.

El inciso 3) del artículo 75 de la Constitución dice: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.” Quiere decir que se requiere una mayoría absoluta cuando se establecen o se modifican asignaciones específicas de recursos coparticipables.

Acá estamos, de algún modo, modificando las asignaciones coparticipables. Sería discutible si lo que estamos modificando es la asignación del recurso coparticipable o si es el mecanismo o el modo de cobro de esos recursos coparticipables.

Cuando los integrantes de la Cámara de Diputados analicen este tema, al menos que sepan que ha sido debidamente estudiado por ambos bloques de este cuerpo.

No hace muchos días, cuando se discutió este tema y no alcanzó a votarse porque creo que estábamos en minoría, de algún modo esboqué una opinión general en rechazo del proyecto que impulsa principalmente el bloque de la mayoría.

Cuando se dispuso, por el decreto 455, el recorte de diversas partidas del presupuesto, inmediata-

mente planteamos nuestra objeción al recorte en materia de educación y también al que se propiciaba respecto de asignaciones que tenían como finalidad atender al sector pasivo, o sea, al sector de los jubilados.

También hicimos mención en nuestras alocuciones al criterio irracional que se había aplicado para efectuar este recorte o ajuste presupuestario. Inmediatamente después de que se discutió este tema vinculado al recorte educacional, que provocó una fuerte movilización social, el presidente y el vicepresidente del bloque de la Alianza presentamos una iniciativa por la que también se rechazaba este proyecto de recorte de los fondos provinciales.

Consideramos que en un Estado que enfrenta una situación de crisis de sus recursos, una caída en el comercio exterior, una disminución en el ingreso de los tributos nacionales –o sea, una caída en la recaudación fiscal–, en cualquier Estado del mundo, sea provincial o nacional, son justificables los ajustes o los recortes de carácter presupuestario. Los Estados entran en la política de racionalizar el gasto cuando se trata efectivamente de necesidades presupuestarias graves.

Pero nuestra resistencia a la decisión del Poder Ejecutivo proviene de que este recorte que dispone unilateralmente el gobierno nacional está acompañado por un proceso de dilapidación y de derroche de los recursos nacionales. Quiere decir que, por un lado, se piden sacrificios a diversos sectores de nuestra sociedad o del Estado a través de las varias partidas presupuestarias que prevé el presupuesto de la Nación; y, por el otro, se sigue dilapidando, derrochando o actuando de un modo dispendioso en lo que hace a los recursos que tiene la Nación.

Entonces, en su momento planteamos cómo puede justificarse que exista un recorte tan abrupto, en este caso respecto de las provincias argentinas, como se ha dicho acá, cuando la Secretaría de Inteligencia del Estado prevé un presupuesto de 200 millones de pesos, siendo que Alfonsín la dejó con uno de 56 millones. ¿Cómo puede ser que se obligue a un sacrificio financiero tan grande a las provincias argentinas, que terminan convirtiéndose en una variable de ajuste más de este modelo, cuando el presupuesto de la Secretaría de Prensa y Difusión ha ido creciendo, a partir de la gestión del presidente Menem, hasta llegar hoy a la cifra de 62 millones de pesos? Otro tanto se ha hablado aquí de los gastos reservados, de los viáticos, de los pasajes y de gastos superfluos.

Este tipo de manejo ha quedado simbolizado por algunas decisiones recientes del gobierno nacional

que han tenido una vasta difusión, como la condonación de deudas a la Unión Obrera Metalúrgica por aproximadamente 120 millones de pesos, o también el perdón de deudas tributarias del orden de los 90 millones de pesos a las terminales automotrices.

Esto quiere decir que no existe una actitud severa en lo que se refiere a la búsqueda de recursos genuinos. Como ya dije, se actúa de un modo dispendioso, se gobierna con ligereza en materia de ingresos y también se realizan gastos superfluos, excesivos y burocráticos, cuando no se filtran por las grietas que produce un sistema que –no titubeamos en señalar– ha sido erosionado por la corrupción.

También debemos mencionar algunas acertadas reflexiones realizadas aquí respecto de la caída de la recaudación fiscal. En su momento, nosotros reconocimos que este gobierno había establecido una muy buena moral en materia de recaudación fiscal. Se trataba de un sistema muy exigente, que, en sus primeros años, había tenido un resultado realmente eficaz. Desde estas mismas bancas no dejamos de señalar esto como un mérito del gobierno, si bien puntualizamos que el sistema tributario era regresivo y propusimos distintas iniciativas en esa dirección.

Pero ese sistema impositivo que en su momento señalamos como un elemento positivo, hoy –sin lugar a dudas– aparece absolutamente relajado. Incluso, hasta parecería existir una suerte de premio a la evasión.

No existe reacción por parte del poder recaudador. Aquí se han señalado casos emblemáticos de evasión impositiva que, sin lugar a dudas, generan una de las más grandes injusticias: que no pague más el que más tiene. Por eso decimos que las provincias no pueden ser variable de ajuste del modelo cuando el modelo empieza a crujir. Nosotros hubiéramos preferido que si había ajuste y realmente se justificaba, las partidas de donde se trajeran los fondos fueran aquellas que, sin lugar a dudas, aparecen como menos sensibles. Por ejemplo, no se justifica atacar los programas sociales, pero en el caso de las provincias precisamente se afectan el Fondo Nacional de la Vivienda, los fondos viales, el Fondo del Ente de Electricidad del Interior destinados al desarrollo de la infraestructura del área, etcétera.

Si bien se nos puede decir –como seguramente argumentarán los senadores del justicialismo– que en definitiva aquí no se afectan partidas sino que se modifica el sistema de cobro, en definitiva esto significa una demora sensible e, incluso una incertidumbre de que las provincias puedan hacerse de

esos recursos. Y es absolutamente inicuo que, en definitiva, lo terminen pagando las provincias argentinas.

Por eso nosotros rechazamos este proyecto de ley tal cual viene redactado, señor presidente, aunque no dudamos de que morigera mucho los efectos del decreto 455. Incluso contiene algunos aspectos que compartimos, como el tope para algunas jubilaciones, propuesta que ni siquiera ha contado con la unanimidad de las opiniones del bloque Justicialista. De este modo, señor presidente, queda planteado nuestro rechazo al dictamen de la mayoría, nuestro voto enfático en contra del decreto 455, particularmente en lo que se refiere a los fondos provinciales contenidos en los artículos 8° y 9° del mencionado decreto de necesidad y urgencia.

Por otra parte, retomo el argumento que diera el miembro informante de nuestro bloque, senador por el Chubut, que señaló que el presupuesto debe cumplirse. Cuando un presupuesto no se cumple, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es volver al poder que tiene la atribución constitucional para legislar sobre la materia y reformular dicho presupuesto, cosa que no ha hecho el gobierno. Además de discrepar con el fondo del asunto, debo decir que ha actuado con un criterio unilateral, mutilando atribuciones privativas del Congreso de la Nación.

Como dudo de que tengamos quórum para votar, concluyo haciendo una exhortación al bloque de la mayoría: que haga llegar sus opiniones e influencias sobre el Poder Ejecutivo para que en el futuro, respecto de distintas decisiones que puedan tomarse en esta materia y con características similares, se utilice el procedimiento que prestigia al Parlamento, que es la rediscusión de las distintas partidas que en su momento fueron aprobadas por el Congreso de la Nación y que constituyeron, en el caso que nos ocupa, el presupuesto de 1999, que en la práctica está siendo pulverizado.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se va a llamar para formar quórum.

–Así se hace.

**Sr. Verna.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Verna.** – Señor presidente: ante la opinión expresada por el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, quiero aclarar que creemos que esta ley no requiere mayoría especial porque no prevé una asignación de fondos distinta de la que ya está establecida. Lo que cambia es solamente la metodología de pago. En lugar de hacerse una transferencia diaria, una parte de los fondos se transfiere en fecha cierta, de acuerdo con lo que dice la ley, sin costo para las provincias por-

que el costo financiero lo absorbe la Nación. Por eso creemos que es suficiente la mayoría simple.

**Sr. Presidente** (Losada). – Pido a los señores senadores que, cuando se llame para votar, consignen su voto con claridad.

**Sr. Alasino**. – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino**. – Señor presidente: que se vote en cuanto haya quórum.

**Sr. Ulloa**. – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Ulloa**. – Señor presidente: quizá el miembro informante pueda hacerme una aclaración mientras esperamos para formar quórum.

La ley 24.625 tenía una duración de tres años, a partir del 3 de enero de 1996. Ignoro si ha sido prorrogada. Si así fuera, estaríamos afectando un recurso que no existe.

**Sr. Presidente** (Losada). – Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Verna**. – Señor presidente: esa ley fue prorrogada el año pasado en una de las últimas sesiones de esta Cámara, cuando se trató la reforma tributaria. En esa misma reunión fue prorrogado el impuesto a los cigarrillos.

**Sr. Presidente** (Losada). – Vamos a seguir llamando para obtener quórum.

–Así se hace.

**Sr. Presidente** (Losada). – Esta Presidencia desea aclarar que hay un tema de suma importancia para ser tratado posteriormente a este asunto. Ruego a los señores senadores que mantengan el quórum una vez votado este dictamen.

–Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Losada). – Queda aprobado en general, por 26 votos a favor y 12 en contra.

–Se enuncian y aprueban los artículos 1º a 3º.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se deja constancia de que los artículos 1º a 3º fueron aprobados por 27 votos a favor y 12 en contra.

–Se enuncia el artículo 4º:

**Sr. Secretario** (Oyarzún). – Se informa que obra en Secretaría una modificación.

**Sr. Verna**. – Que se lea, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Losada). – Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Oyarzún). – (*Lee*)

“Artículo 4º: Dispónese, asimismo y con igual propósito que el artículo anterior, una rebaja de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000) en los créditos vigentes del inciso 5 - Transferencias de la Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior - Código 99 - Transferencias a provincias y comisiones Interjurisdiccionales (ATN).

”Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional no podrá, hasta la finalización del presente ejercicio financiero, utilizar más de cuarenta millones de pesos (\$ 40.000.000) del crédito asignado al Código 96 - Transferencias ATN - Partida 641, de la jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, para reforzar créditos para gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional.”.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se va a votar el artículo 4º, conforme a las modificaciones recientemente leídas.

–La votación resulta afirmativa

**Sr. Presidente** (Losada). – Se deja constancia de que el artículo 4º fue aprobado por 27 votos a favor y 12 en contra.

–Se enuncia el artículo 5º:

**Sr. Oyarzún**. – La Secretaría informa que el nuevo artículo 5º es el siguiente y que todos los montos están expresados en pesos: “Dispónese una rebaja en los créditos autorizados por la ley N° 25.064, ajustados por el decreto N° 455/99, para el inciso 3 - Servicios No Personales, Partida Principal 7 - Pasajes y viáticos, que el jefe de Gabinete de Ministros distribuirá entre los programas de las siguientes jurisdicciones, incluidas en las respectivas entidades:

“Jurisdicción 20-03-Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, 1.000.000; 30-Ministerio del Interior, 3.000.000; 35-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 3.000.000; 45-Ministerio de Defensa, 4.000.000 y 50-Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 4.000.000.”

**Sr. Presidente** (Losada). – Se va a votar el artículo 5º, tal cual fue leído por Secretaría.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se deja constancia de que el artículo 5º fue aprobado por 27 votos a favor y 12 en contra.

–Se enuncia y aprueba el artículo 6º.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se deja constancia de que el artículo 6º fue aprobado por 27 votos a favor y 12 en contra.

**Sr. Ulloa**. – Señor presidente: entiendo que el artículo 6º es el 5º anterior.

**Sr. Presidente** (Losada). – Sí, señor senador.

**Sr. Ulloa**. – Entonces, quisiera que quedara constancia de mi voto por la afirmativa.

**Sr. Presidente** (Losada). – En consecuencia, el artículo 6º fue aprobado por 28 votos por la afirmativa y 11 por la negativa.

**Sr. Yoma**. – Señor presidente: para dejar constancia de mi voto por la negativa al tope de 3.100 pesos.

**Sr. Presidente** (Losada). – Por lo tanto, se deja constancia de que el artículo 6º fue aprobado por 27 votos por la afirmativa y 12 por la negativa.

–Se enuncian y aprueban los artículos 7º a 10.

**Sr. Presidente** (Losada). – Se deja constancia de que los artículos 7ºa 9º fueron aprobados por 27 votos a favor y 12 en contra, mientras que el artículo 10 fue aprobado por 28 votos a favor y 11 en contra.

– El artículo 11 es de forma

**Sr. Presidente** (Losada). – Queda sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup> Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

## 172

### CONTINUIDAD DE PROGRAMAS MEDICO-ASISTENCIALES DEL PAMI PARA VETERANOS DE MALVINAS

**Sr. Presidente** (Losada). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se garantiza la continuidad de los programas médico-asistenciales del PAMI para veteranos de Malvinas. (Orden del día N° 249.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Oyarzún). – (Lee)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión, garantizando la continuidad de los programas médico-asistenciales del PAMI para los veteranos de Malvinas (C.D.-103/98);

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º – Los beneficiarios incorporados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados mediante las leyes 23.848, 24.652 y 24.892 seguirán en la órbita de dicho instituto, a fin de garantizar la continuidad de los programas médico-asistenciales.

Art. 2º – Los beneficiarios de las leyes 23.848, 24.652 y 24.892 podrán gozar de la obra social que tuvieren por relación laboral.

Art. 3º – Las organizaciones de veteranos de guerra tendrán los mismos derechos y obligaciones que las organizaciones de jubilados y pensionados.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores (texto ordenado 1995), el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 13 de mayo de 1999.

*Omar M. Vaquir. – Carlos A. Verna. –  
Humberto E. Salum. – Leopoldo R. G.  
Moreau. – Carlos H. Almiron. – Emilio M.  
Cantarero. – Julio C. Humada. – Luis A.  
León. – Héctor M. Maya. – Jorge A.  
Villaverde. – Juan C. Altuna. – Edgardo  
J. Gagliardi. – Tomás R. Pruyas. – José A.  
Romero Feris. – Osvaldo R. Sala.*

#### ANTECEDENTE

### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(28 de octubre de 1998)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º – Los beneficiarios incorporados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados, mediante las leyes 23.848, 24.652 y 24.892, seguirán en la órbita de dicho instituto, a fin de garantizar la continuidad de los programas médico-asistenciales.

Art. 2º – Los beneficiarios de las leyes 23.848, 24.652 y 24.892, podrán optar por la obra social que tuvieren por relación laboral.

Art. 3º – Las organizaciones de veteranos de guerra tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de las organizaciones de jubilados y pensionados.

Art. 4º – Los gastos que demanden la atención de las prestaciones médicas y sociales de las pensiones no contributivas otorgadas mediante las leyes 23.848, 24.652 y 24.892, serán imputados a “Rentas generales”.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.  
*Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.*